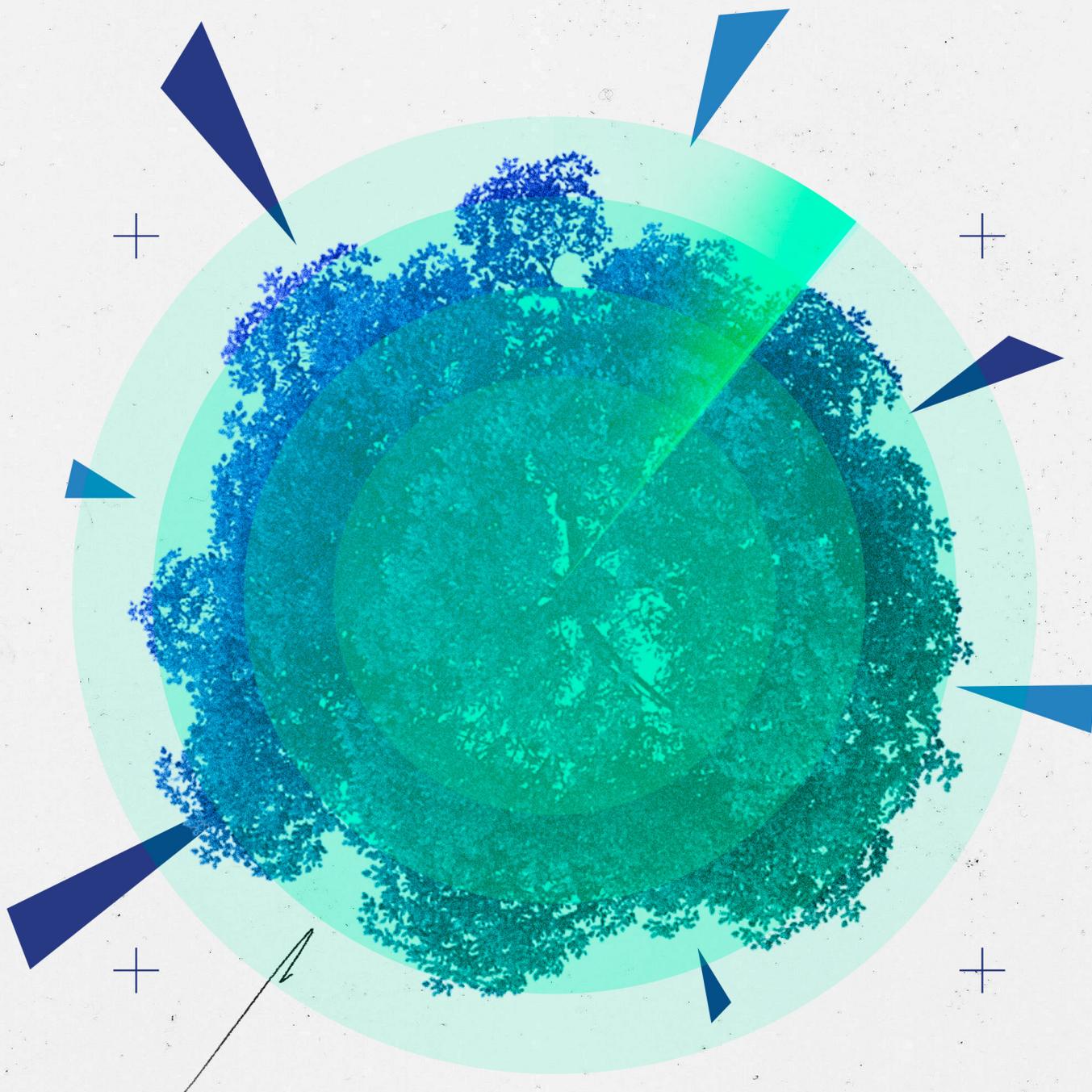




**INSTITUTO IGARAPÉ**  
a think and do tank



**AMAZON  
INVESTOR  
COALITION**



# **BAJO EL RADAR**

Riesgos de seguridad territoriales y regulatorios  
en la Amazonía brasileña y colombiana

# Tabla de contenidos

<b>Resumen ejecutivo</b> .....	3
<b>Introducción</b> .....	4
<b>Sección I.</b> <b>Conceptualización de los factores y riesgos de inseguridad</b> .....	5
<b>Sección II.</b> <b>Factores y riesgos de inseguridad en la Amazonía brasileña</b> .....	8
<b>Sección III.</b> <b>Factores y riesgos de inseguridad en la Amazonía colombiana</b> ...	13
<b>Sección IV.</b> <b>Mapeo de riesgos de seguridad territoriales y regulatorios</b> .....	18
<b>Resultados de la encuesta en Brasil</b> .....	19
<b>Resultados de la encuesta en Colombia</b> .....	29
<b>Comparación entre Brasil y Colombia</b> .....	39
<b>Sección V.</b> <b>Implicaciones de las políticas públicas en Brasil y Colombia</b> .....	40
<b>Anexo: Ejemplos de medidas para mitigar los riesgos territoriales y regulatorios</b> .....	45
<b>Notas finales</b> .....	49

# Resumen ejecutivo

La Amazonía enfrenta una convergencia creciente de amenazas ambientales, territoriales y de gobernanza — impulsadas por economías ilegales, presión extractiva y débil presencia estatal — que ponen en riesgo el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos. Abordarlas requiere fortalecer la gobernanza territorial, empoderar a comunidades locales e indígenas y alinear la ambición política con la experiencia de quienes están en la primera línea.

Las amenazas a la seguridad física, los conflictos por la tenencia de la tierra, la degradación ambiental y la débil presencia del Estado se encuentran entre los desafíos más urgentes que enfrentan las organizaciones que actúan en la primera línea de la Amazonía. Estos riesgos se ven agravados por la demanda global, regional y nacional de *commodities* — incluyendo madera, oro, carne bovina y soya —, lo que intensifica la presión sobre los territorios, debilita las salvaguardas regulatorias y alimenta prácticas extractivas depredadoras. En este contexto, las amenazas físicas representan solo una de las manifestaciones de la inseguridad. Igualmente generalizadas son las acciones de redes criminales que buscan consolidar el control territorial e influencia política, a menudo mediante intimidación, corrupción y cooptación de las estructuras de gobernanza local, configurando un “ecosistema de delitos ambientales”,<sup>1</sup> donde las economías ilegales, la captura institucional y la degradación ambiental se refuerzan mutuamente.

En Brasil, los riesgos ambientales y financieros — en particular la deforestación ilegal y la inestabilidad en el financiamiento — son las principales preocupaciones. En Colombia, la inseguridad vinculada al control criminal del territorio, las economías ilegales y la movilidad restringida surgieron como las amenazas más relevantes. En ambos países, actores de la sociedad civil reportaron una exposición significativamente mayor a la inseguridad territorial en comparación con sus contrapartes

del sector privado, y exigieron de forma constante instituciones más sólidas, una mejor gobernanza y modelos de desarrollo inclusivos basados en las realidades locales.

Estas conclusiones se basan en una encuesta en línea estructurada y en una serie de entrevistas con informantes clave realizadas por el Instituto Igarapé entre octubre de 2024 y mayo de 2025. La investigación buscó evaluar con mayor precisión las percepciones de riesgo y las soluciones propuestas por instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado activos en la Amazonía. En total, se llevaron a cabo 33 entrevistas semiestructuradas entre octubre de 2024 y enero de 2025. Las encuestas en línea realizadas en Colombia y Brasil entre marzo y mayo de 2025 generaron otras 57 respuestas de Brasil y 31 de Colombia. A pesar del tamaño modesto de la muestra, las respuestas ofrecen valiosas percepciones cualitativas sobre la seguridad y la sostenibilidad en la Amazonía, capturando tanto los desafíos sistémicos que enfrentan los actores como las estrategias empleadas para enfrentarlos.

En conjunto, los hallazgos subrayan que la Amazonía enfrenta una convergencia creciente de riesgos territoriales, ambientales y de gobernanza que debilitan el desarrollo sostenible y ponen en peligro los objetivos climáticos y de biodiversidad a largo plazo. El análisis destaca una serie de recomendaciones de política interconectadas, fundamentadas en la experiencia vivida y las realidades operativas de personas y organizaciones que actúan en la primera línea. Estas recomendaciones enfatizan la necesidad urgente de reforzar la gobernanza territorial mediante una mayor presencia estatal, el fortalecimiento de la capacidad judicial y una aplicación más efectiva de las leyes ambientales y de tenencia de la tierra. Al mismo tiempo, empoderar a los pueblos indígenas y comunidades locales a través del reconocimiento legal, la gobernanza participativa y el acceso a medios de vida sostenibles es esencial para fomentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente a las presiones criminales y extractivas.

Los encuestados identificaron de forma sistemática factores estructurales como la inseguridad en la tenencia de la tierra, la corrupción y la fragmentación regulatoria, especialmente marcados en áreas fronterizas y en territorios afectados por la violencia organizada. Para abordar estos problemas, el informe propone una estrategia dual: fortalecer las instituciones formales y, al mismo tiempo, adoptar modelos de gobernanza híbrida que reflejen las realidades locales. Los inversionistas de impacto, las autoridades públicas y los donantes también deben adaptarse, incorporando evaluaciones de riesgos territoriales y regulatorios en la planificación de proyectos, e invirtiendo en el fortalecimiento de capacidades de los actores que los implementan. El monitoreo comunitario, la innovación digital y los compromisos políticos estratégicos — como la Declaración de Belém, el Plan de la Amazonía de Brasil y la *Visión Amazonía* de Colombia — se señalan como vías prometedoras para alinear la protección ambiental con el Estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Las recomendaciones también subrayan la necesidad de considerar y enfrentar dinámicas más controvertidas o poco reconocidas, como las negociaciones informales con actores armados y la normalización de la extorsión. Estas dinámicas son síntomas de una gobernanza débil o ausente, de una escasa aplicación de la regulación y de altos niveles de informalidad. Un compromiso estratégico basado en los derechos, combinado con salvaguardas sólidas y mecanismos de rendición de cuentas, es fundamental para gestionar estos desafíos sin reforzar estructuras de poder ilícitas. El futuro de la Amazonía requiere inversiones coherentes y transparentes, adaptadas a las realidades locales, que vinculen los compromisos políticos con la experiencia práctica de quienes trabajan en el territorio. Estas recomendaciones están dirigidas a los gobiernos nacionales y subnacionales, a las organizaciones filantrópicas, a los donantes internacionales y, sobre todo, a las comunidades que dependen del bosque y lo defienden.

## Introducción

Proteger la Amazonía y a las personas que dependen de ella requiere un compromiso sólido tanto con el Estado de derecho como con el crecimiento de una economía verde dinámica. Estos objetivos se refuerzan mutuamente, en lugar de contradecirse. En toda la cuenca, agencias públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil están movilizando cada vez más recursos para la conservación, la restauración ecológica y el desarrollo de iniciativas bioeconómicas sostenibles. Sin embargo, las inversiones en seguridad pública, instituciones judiciales y protección de los derechos humanos siguen siendo insuficientes. Esta negligencia no resulta sorprendente: enfrentar el crimen organizado y la corrupción sistémica es políticamente sensible y con frecuencia evitado. Pero evadir estas verdades incómodas es peligroso. En Brasil, más del 93% de la deforestación registrada en 2023 ocurrió sin autorización legal, lo que indica una alta prevalencia de actividades ilegales.<sup>2</sup> En Colombia, una gran parte de la deforestación está vinculada a la apropiación ilegal de tierras, la construcción de carreteras no autorizadas, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la minería no regulada, especialmente en tierras públicas como áreas protegidas y resguardos indígenas.<sup>3</sup> Estos hallazgos subrayan la urgencia de integrar la seguridad, la transparencia y la justicia en cualquier estrategia significativa para proteger el futuro de la región.

Varios obstáculos desincentivan a gobiernos, empresas y filántropos a fortalecer el Estado de derecho en la Amazonía. Medidas como mejorar la seguridad pública o reformar el sistema judicial suelen verse como gastos y no como inversiones que generan beneficios. Por ello, se dejan en manos de instituciones estatales que cuentan con recursos limitados. Las iniciativas de seguridad pública también conllevan riesgos reputacionales y operativos que hacen que muchos inversores actúen con cautela.

A estos desafíos se suma la vasta escala y complejidad geográfica de la Amazonía — una región más grande que Europa Occidental —, donde mantener una presencia física sostenida de las fuerzas de seguridad es costoso y logísticamente desafiante. En este contexto, las interpretaciones convencionales del Estado de derecho — centradas en la autoridad estatal, la presencia institucional y la disuasión formal — a menudo resultan insuficientes. Al mismo tiempo, existe una comprensión limitada sobre la magnitud y profundidad de los déficits en materia de Estado de derecho: las evaluaciones de línea de base y el monitoreo continuo son inconsistentes, y los procesos de debida diligencia tienden a enfocarse exclusivamente en la corrupción o en violaciones evidentes de derechos humanos, como el trabajo forzoso. El resultado es que las preocupaciones relacionadas con el Estado de derecho son habitualmente relegadas, y sus externalidades se consideran simplemente como “el costo de hacer negocios”.

En respuesta a las crecientes amenazas del crimen organizado y del crimen ambiental, la Coalición de Inversionistas por la Amazonía (Amazon Investor Coalition - AIC) y el Instituto Igarapé lanzaron este estudio integral sobre la inseguridad territorial y regulatoria en la Amazonía brasileña y colombiana. A partir de una revisión documental y entrevistas con expertos, la primera sección presenta un marco conceptual de los principales factores y riesgos. Las secciones dos y tres examinan estos riesgos en Brasil y Colombia, respectivamente, con base en entrevistas a 33 profesionales con experiencia directa en el territorio. La cuarta sección resume los resultados de una encuesta en línea estructurada, aplicada a 88 personas en ambos países, con énfasis tanto en los desafíos como en las soluciones. El informe concluye con recomendaciones estratégicas dirigidas a actores del sector público y privado y de la sociedad civil.

## Sección I. Conceptualización de los factores y riesgos de inseguridad

Existen varios factores que impulsan la inseguridad territorial y regulatoria en la Amazonía de Brasil y Colombia. Con base en la revisión de literatura, entrevistas con informantes clave y una breve encuesta aplicada a actores seleccionados en ambos países, se identificaron ocho factores prioritarios: inestabilidad política, condiciones económicas débiles, debilidades institucionales, incertidumbre sobre la propiedad de la tierra, impactos ambientales, corrupción y falta de transparencia, tensiones con comunidades indígenas y locales, y actuación continua del crimen organizado y de la violencia interpersonal (véanse la Figura 1 y el Anexo 1).

Estos ocho factores y riesgos sirvieron como un marco preliminar para la evaluación, orientando el diseño de las entrevistas y las preguntas de la encuesta. Aunque no es completa, la lista proporciona una base empírica para el análisis y las recomendaciones presentadas en las secciones siguientes del informe.

En este estudio, el término “factores” se refiere a fuerzas estructurales y arraigadas — como la volatilidad política, la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra y la corrupción — que facilitan el avance ilegal sobre territorios y provocan daños ambientales, y que requieren reformas sistémicas. En cambio, los “riesgos” son eventos más inmediatos y próximos que derivan de estos factores, incluyendo cambios repentinos en el liderazgo, intimidación violenta por parte de redes criminales organizadas y ocupaciones oportunistas tras la apertura de nuevas carreteras. Los riesgos pueden anticiparse y, potencialmente, mitigarse mediante medidas específicas, como el

despliegue rápido de fuerzas de seguridad, la suspensión temporal de permisos o la mediación de conflictos liderada por las comunidades. Es importante señalar que los factores y los riesgos no siempre son mutuamente excluyentes y, a menudo, se superponen, ya que ciertos factores estructurales pueden manifestarse simultáneamente como riesgos agudos en contextos territoriales que cambian rápidamente.

**Figura 1.** Conceptualización de factores y riesgos (enfoque general)

Factores	Riesgos seleccionados
<b>Inestabilidad política</b>	Cambios regulatorios y de política, protestas sociales y disturbios, cambios en el liderazgo.
<b>Condiciones económicas débiles</b>	Fluctuaciones en los precios de los productos básicos y en los tipos de cambio, infraestructura desigual y deficiente, pobreza, desigualdad e informalidad.
<b>Debilidades regulatorias</b>	Regulación inconsistente y poco clara, falta de aplicación de la ley, cooptación de las instituciones regulatorias.
<b>Incertidumbre sobre la propiedad de la tierra</b>	Disputas sobre la tenencia y propiedad de la tierra, invasiones y ocupaciones, registros de tierras ausentes o incompletos.
<b>Alteraciones ambientales</b>	Deforestación ilegal y degradación, amenazas a la biodiversidad y a la conservación, vulnerabilidades frente al cambio climático, capacidad limitada para cumplir normas ambientales y climáticas.
<b>Corrupción y falta de transparencia</b>	Corrupción en la gestión de recursos naturales, débil rendición de cuentas y transparencia, participación de actores estatales y no estatales externos.
<b>Relaciones tensas con comunidades indígenas y locales</b>	Tensiones intra-comunitarias sobre la gobernanza, conflictos sociales y comunitarios por tierras y recursos.
<b>Crimen organizado e interpersonal</b>	Penetración y control territorial por redes del crimen organizado, alcance del crimen ambiental, incidencia de extorsión, acoso e intimidación, violencia selectiva contra poblaciones protegidas.

- **La inestabilidad política** suele manifestarse en cambios abruptos en los liderazgos a nivel federal, estatal o municipal. Estos cambios desestabilizan las políticas de protección ambiental y de derechos sobre la tierra, dejando a las agencias de conservación y a las comunidades tradicionales en una situación de incertidumbre.<sup>4</sup> También pueden desencadenar protestas o disturbios que derivan en violencia, lo que desalienta la inversión en soluciones basadas en la naturaleza.<sup>5</sup>
- **Las condiciones económicas débiles**, en particular la dependencia de mercados de materias primas volátiles, la infraestructura deficiente y los altos niveles de pobreza, generan inestabilidad social. En gran parte de la Amazonía, los ingresos dependen de actividades extractivas informales que prometen ganancias rápidas. Esto, a su vez, alimenta la resistencia a modelos de desarrollo que ofrecen beneficios más lentos pero sostenibles.<sup>6</sup>
- **Las debilidades regulatorias** surgen especialmente cuando las leyes sobre el uso del suelo y la protección ambiental no se aplican adecuadamente. También pueden ser resultado de decisiones judiciales contradictorias y de sanciones desiguales frente a las infracciones. Las lagunas en la regulación fomentan la apropiación ilegal de tierras, la tala ilícita y la minería no regulada.<sup>7</sup> Actores poderosos — ya sean oficiales o clandestinos — se aprovechan de estos vacíos, socavando la rendición de cuentas y agudizando los conflictos.<sup>8</sup>
- **La incertidumbre en la tenencia de la tierra** proviene de registros incompletos o inexistentes, tierras públicas no designadas, reclamos superpuestos y desconfianza hacia las autoridades. Los conflictos entre empresas privadas, colonos, ganaderos, pueblos indígenas y comunidades locales escalan con frecuencia hacia disputas legales o incluso violencia directa. La débil aplicación de los derechos de propiedad incentiva aún más las ocupaciones no autorizadas.<sup>9</sup>
- **Las alteraciones ambientales** provocadas por la agricultura, la ganadería, la tala o la minería pueden generar conflictos locales y una mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad. La pérdida de biodiversidad agudiza las tensiones por el acceso a los recursos, retrasa proyectos e incrementa los costos de cumplimiento regulatorio. Al mismo tiempo, los impactos climáticos, como inundaciones, sequías y el aumento de las temperaturas, agravan estas tensiones en un contexto de débil aplicación de las normas ambientales.<sup>10</sup>
- **La corrupción y la falta de transparencia** socavan de manera crítica las medidas relacionadas con el Estado de derecho. En ausencia de mecanismos de control, prosperan el fraude, la colusión, el lavado de dinero y los conflictos de interés. El acceso restringido a la información pública favorece la mala gestión y alimenta el descontento de las comunidades, erosionando aún más la confianza.<sup>11</sup>
- **Relaciones tensas con comunidades indígenas y locales** se ven exacerbadas por agravios históricos y presiones externas de las industrias extractivas. La falta de consulta adecuada y el incumplimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado suelen desencadenar protestas, litigios y demoras en los proyectos — incluso dentro de las propias comunidades, en torno a disputas por el liderazgo y el control de los recursos.<sup>12</sup>
- **El crimen organizado y ambiental** actúa como una fuerza desestabilizadora latente. Las redes del narcotráfico trafican crecientemente con madera, oro y fauna silvestre, financiándose mediante la extorsión y la corrupción.<sup>13</sup> Su presencia a menudo implica connivencia con funcionarios corruptos, amenazas directas contra defensores de derechos humanos y una incertidumbre crónica en torno a la gobernanza de la tierra, lo que mina cualquier posibilidad de inversión duradera basada en la naturaleza.

## Sección II. Factores y riesgos de inseguridad en la Amazonía brasileña

La regulación territorial de Brasil en sus 772 municipios amazónicos se caracteriza por particularidades y desafíos notables. Este análisis se basa en 17 entrevistas con informantes clave que representan un abanico diverso de actores, incluyendo profesionales de la sociedad civil, fiscales federales y estatales, policías federales y militares, líderes *quilombolas*<sup>14</sup> e indígenas, académicos y gestores públicos de los estados de Pará, Amazonas, Acre, Rondônia y Maranhão.<sup>15</sup>

A pesar de contar con uno de los marcos jurídicos más completos de América Latina para combatir los delitos ambientales — que abarca los niveles municipal, estatal y federal —, Brasil enfrenta grandes dificultades para hacer cumplir sus propias normas en el territorio. Como admitió un agente de la Policía Federal: “La regulación formal de Brasil es muy buena; Brasil está mucho mejor que otros países americanos en cuanto a regulación. [...] Pero en términos de presencia estatal, que es el cuerpo encargado de aplicar estas normas, fallamos mucho. Llego a estos lugares para hacer inspecciones, tardo mucho en llegar, cuando llego el tipo se esconde y todo lo que me queda es quemar las chozas de los mineros ilegales. La acción en este sentido es muy inadecuada.”

La Amazonía Legal de Brasil presenta un verdadero mosaico de realidades regulatorias. Los centros urbanos y las capitales estatales cuentan con regulación formal más consolidada, mientras que las áreas rurales remotas, como comunidades situadas a dos días en barco desde Itaituba (Pará), por ejemplo, son mucho más vulnerables a la

influencia de actores y economías informales o ilegales. Como explicó un fiscal del Ministerio Público: “Existen gradientes de regulación; no es una sola cosa. Entiéndanlo como gradientes. Hay lugares donde las estructuras estatales están más presentes: en las capitales y sus alrededores, en algunos municipios grandes. En estos espacios, la regulación formal ocurre. [...] Pero si vas a Itaituba, estás a dos días en barco, no hay equipos disponibles, la capital está lejos. Entonces lo informal se impone, si no lo ilegal.”

Representantes de la sociedad civil señalaron además que muchos “acuerdos operativos” funcionan al margen de la ley formal. “Los marcos regulatorios no pueden regularlo todo”, comentó uno de ellos. “Hay cosas que no tienen reglas y que igual se hacen; lo irregular predomina.” Incluso en áreas con mejor cobertura institucional, persisten vacíos de gobernanza. Un fiscal del estado de Pará recordó: “El tráfico de influencias es un problema. Ese establecimiento no es inspeccionado porque el propietario favorece al político local de alguna manera. Ayuda en la campaña, ayuda en la elección. Ofrece permisos y licencias, pero hasta ahí. No hay fiscalización. Hay instrucciones de los superiores para no encontrar ese lugar. Existen grandes emprendimientos sin ningún tipo de inspección.”

La resistencia política y la interferencia en la regulación, desde los ministerios federales hasta los concejos municipales, agravan estas fragilidades. Autoridades del poder ejecutivo y legisladores suelen presionar para debilitar las leyes ambientales y de tierras en busca de beneficios de corto plazo. Como advirtió un fiscal del Ministerio Público: “Gobernadores estatales y municipales frecuentemente emiten actos regulatorios para cambiar las reglas. El Ministerio Público debe estar atento para luego solicitar la anulación de estos actos y declarar su inconstitucionalidad. Hubo un decreto estatal del gobernador que prácticamente excluía la participación pública en los consejos que administran los fondos climáticos.”

La brecha digital en la Amazonía agrava aún más estos problemas. Por ejemplo, con solo el 20% de los municipios de Pará ofreciendo licenciamiento en línea, la mayoría de las solicitudes todavía avanzan lentamente mediante trámites en papel — cuando llegan a una oficina.<sup>16</sup> En la práctica, actores no autorizados comercializan habitualmente permisos y escrituras falsificadas, mientras que los solicitantes legítimos enfrentan procesos opacos, tarifas impredecibles y esperas interminables. La opacidad en los registros de tierras y licencias no solo desalienta la inversión genuina en emprendimientos sostenibles, sino que también priva al Estado de ingresos y deja a las comunidades locales sin herramientas para defender sus derechos. Existe un conjunto de actividades que prosperan gracias a la falta de claridad en las leyes y a la aplicación inconsistente de las normas, lo que genera un entorno donde nadie puede estar seguro de las reglas.

La inseguridad sobre la tenencia de la tierra está en el centro del problema. Extensas áreas siguen sin títulos claros, mientras que los reclamos superpuestos, las invasiones y el acaparamiento de tierras obstaculizan la planificación ordenada y alientan a actores depredadores. Como advirtió un representante de la sociedad civil: “Existen conflictos agrarios muy presentes. Son conflictos históricos que han orientado acciones durante muchos años... La falta de regularización de tierras en Brasil deja estos territorios amenazados por invasores, acaparadores y concentradores de tierras.”

Los conflictos complejos por la tierra, el acaparamiento y la existencia de grandes propiedades sin registro oficial han debilitado la certeza legal sobre quién es dueño de qué. Esto ha impedido planificar de forma ordenada el uso del suelo y, según varios entrevistados, ha favorecido prácticas abusivas y conflictos rurales. La falta de claridad en las leyes también favorece la especulación con la tierra y la deforestación ilegal, una prueba de que, en la Amazonía, los conflictos de tierras y la degradación ambiental son inseparables.

La precariedad socioeconómica y las brechas de infraestructura agravan aún más esta inseguridad. El sistema vial y de energía de la región fue diseñado para servir a grandes proyectos de agroindustria y generación hidroeléctrica, mientras que la cobertura de internet sigue siendo esporádica.<sup>17</sup> Las inundaciones estacionales pueden dejar caminos intransitables durante semanas, aislando a las comunidades de los servicios básicos y de los mercados formales. Ante la falta de alternativas viables, muchas personas recurren a medios de vida extractivos o ilícitos. Como señaló un entrevistado: “La Amazonía fue pensada y estructurada para la agroexplotación y la energía eléctrica — no para la agricultura familiar. Hay lugares que se vuelven inaccesibles durante la temporada de lluvias. Muchos lugares no tienen acceso a internet. Esto impacta directamente en el resultado de cualquier inversión.” En este vacío de frontera, donde la presencia estatal es débil, el monitoreo es casi inexistente y la rendición de cuentas es una promesa lejana, los mercados ilegales prosperan para satisfacer la demanda local.<sup>18</sup>

La corrupción y la opacidad agravan las brechas en la aplicación de la ley. Los procesos de licenciamiento y titulación de tierras son opacos, y los municipios con poco personal carecen de recursos para inspeccionar o asesorar a los solicitantes. La interferencia política garantiza que los operadores bien conectados eviten el escrutinio, mientras que los pequeños productores no reciben ningún tipo de apoyo. En palabras de un fiscal del Ministerio Público: “El sistema que tenemos hoy favorece la informalidad, favorece la no fiscalización, que actualmente está muy por debajo del nivel que debería tener, y se vuelve rígido en el momento equivocado. Hay muchos pequeños emprendimientos que no causarían degradación si tuvieran más apoyo — si fueran orientados.”

Los reguladores municipales, limitados por la falta de personal, la escasa capacitación, la alta rotación y la interferencia política, a menudo hacen la vista gorda ante emprendimientos con buenas conexiones, privilegiando el beneficio privado por encima del interés público. Mientras tanto, la corrupción endémica en todos los niveles de gobierno socava los esfuerzos de protección, conservación y regeneración de tierras.

El crimen organizado se ha infiltrado en las economías de frontera. Grupos criminales como el Comando Vermelho (CV), el PCC (Primeiro Comando da Capital) y facciones del norte se han diversificado hacia la tala ilegal, la minería de oro y el tráfico de fauna silvestre, a menudo mediante la coacción de pobladores locales y la cooptación de funcionarios públicos. Un fiscal federal informó: “Nuestro estado está infestado de organizaciones criminales... Aquí, principalmente el CV, que tiene la operación más grande. Pero también está el PCC y, en cierta medida, las facciones del norte.” Líderes afrobrasileños, incluidos representantes quilombolas, afirman que incluso en tierras demarcadas “prevalecen la informalidad y la disputa”, mientras que las comunidades indígenas enfrentan dificultades para contener a los traficantes, a pesar de contar con control formal sobre concesiones mineras y forestales.<sup>19</sup>

Los defensores ambientales en la primera línea de riesgo operan bajo amenazas constantes. Brasil registra una de las cifras más altas del mundo de ataques contra defensores ambientales<sup>20</sup> — tanto físicos como, cada vez más, lo que muchos denominan “muerte virtual” a través del acoso digital. Un funcionario público observó: “La muerte ya no es solo física. La muerte virtual y las masacres en redes sociales son hoy algo muy común.” Representantes de la sociedad civil denuncian la ausencia de regulación sobre redes sociales y advierten sobre fenómenos de “linchamiento virtual” y “odio colectivo”, mientras que los mecanismos estatales de protección siguen insuficientemente financiados. Como señala un fiscal: “El riesgo legal es que, al trabajar con

casos de improbidad administrativa vinculados al derecho ambiental, uno puede terminar siendo denunciado por quienes han sido sancionados.”

Las limitaciones operativas e institucionales también representan un riesgo para las políticas de protección y conservación ambiental. Según informantes clave, los recursos para combustible en patrullajes son escasos, el personal es limitado y se pierde toda comunicación una vez que los equipos salen de las áreas urbanas. Un agente de la Policía Militar en Rondônia relató: “Faltan aeronaves para las inspecciones, faltan medios para movilizar al personal. Cuando salimos de las áreas urbanas, ya no tenemos radio, internet ni teléfonos. Perdemos toda comunicación y no podemos pedir apoyo logístico.”

En las fronteras porosas de Brasil, los pueblos indígenas están forjando sus propias alianzas para defender sus territorios — testimonio de la urgente necesidad de fortalecer tanto las instituciones del Estado de derecho como la infraestructura básica. Según un representante de la sociedad civil: “En las regiones fronterizas donde no hay presencia del Estado, o donde los que están no tienen formación, ni condiciones para actuar, ni recursos. Son los propios pueblos indígenas los que están tratando de proteger sus territorios. Se están uniendo con aliados en la región para intentar enfrentarlo.”

**Figura 2.** Resumen de los principales riesgos y factores identificados por los entrevistados en Brasil ( $n=17$ )

Riesgo	Descripción
<b>Crimen organizado</b>	Grupos criminales como el CV y el PCC combinan el narcotráfico con la tala y minería ilegales en áreas fronterizas y protegidas, cooptando a jóvenes y deteriorando la seguridad comunitaria.
<b>Choques y tensiones climáticas</b>	Las sequías e inundaciones recurrentes arruinan cosechas, interrumpen el suministro de alimentos y la movilidad, y impactan especialmente a las comunidades tradicionales, limitando el acceso a servicios básicos.
<b>Amenazas a defensores ambientales</b>	Los activistas enfrentan agresiones físicas, acoso judicial y “muerte virtual” en redes sociales, mientras la protección del Estado, limitada y descoordinada los deja expuestos.
<b>Conflictos agrarios en escalada</b>	Las disputas territoriales entre agricultores, ocupantes y comunidades tradicionales derivan en violencia, especialmente en tierras quilombolas e indígenas no registradas.
<b>Debilidades y limitaciones operativas</b>	Las agencias estatales con escasos recursos, poco personal y equipamiento insuficiente dejan vastas áreas fuera del alcance de la fiscalización y el monitoreo.
<b>Presión regulatoria y retrocesos legales</b>	Intereses políticos y comerciales presionan para debilitar las leyes ambientales y de uso del suelo, facilitando emprendimientos depredadores.
<b>Desplazamiento de comunidades tradicionales</b>	Pueblos indígenas, <i>quilombolas</i> y ribereños son expulsados de sus territorios ancestrales por la violencia, la presión económica y el colapso de los servicios básicos.

Factor	Descripción
<b>Inseguridad en la tenencia de la tierra</b>	Títulos superpuestos, acaparamiento de tierras y grandes propiedades no registradas generan confusión, paralizan la planificación territorial y alimentan la depredación y los conflictos agrarios.
<b>Déficit socioeconómico y de infraestructura</b>	La escasez de servicios de salud, educación y saneamiento, sumada a la precariedad en el suministro eléctrico, las vías de acceso y la conectividad, empuja a las poblaciones locales hacia medios de vida extractivos o ilícitos.
<b>Corrupción y falta de rendición de cuentas</b>	El otorgamiento opaco de licencias y la fiscalización politizada permiten que actores bien conectados evadan el escrutinio, desvíen prioridades hacia beneficios privados y erosionen la confianza en las instituciones del Estado.
<b>Debilidad institucional</b>	La débil presencia estatal, la alta rotación de personal y los procesos manuales dificultan la supervisión. Existen pocos sistemas digitales para agilizar licencias, registrar infracciones o brindar acceso en línea a los títulos de propiedad, lo que permitiría mayor seguridad frente al acaparamiento y a los reclamos superpuestos.
<b>Resistencia política a la regulación</b>	Actores políticos y grupos empresariales presionan de forma sistemática para debilitar las salvaguardas ambientales, lo que retrasa o diluye las regulaciones y obstaculiza su implementación efectiva.
<b>Injerencia política en los organismos de control y fiscalización</b>	Liderazgos locales ejercen presión sobre las agencias responsables de la aplicación de la ley, subordinando decisiones técnicas a intereses partidarios y limitando la supervisión autónoma.

## Sección III.

# Factores y riesgos de inseguridad en la Amazonía colombiana

Colombia enfrenta un conjunto complejo de desafíos regulatorios y territoriales en sus 61 municipios amazónicos y 18 territorios especiales (áreas no municipalizadas).<sup>21</sup> Esta evaluación se basa en 16 entrevistas a informantes clave, realizadas con un grupo diverso de actores, entre ellos las fuerzas armadas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente, centros de investigación, líderes indígenas y comunitarios, y académicos de varios departamentos, incluidos Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés.<sup>22</sup>

La gobernanza en la Amazonía colombiana se encuentra en una encrucijada crítica, afectada por dinámicas de poder volátiles, la presencia de facciones criminales arraigadas y un entramado de normas formales e informales. Líderes de la sociedad civil, funcionarios públicos y agencias de cooperación internacional coinciden en que este es uno de los momentos más difíciles en décadas para trabajar en la región. Como afirmó un referente ambiental: “En los treinta años que llevo en la Amazonía, esta es la primera vez que hemos tenido que evacuar al personal por razones de seguridad.”

Al igual que en Brasil, la débil aplicación de las regulaciones obliga a los actores a desenvolverse en un entorno complejo, donde las estructuras formales de gobernanza coexisten con sistemas ilegales e informales. Los déficits de infraestructura y las barreras logísticas, especialmente la falta de acceso a áreas remotas, agravan aún más las brechas de gobernanza, impidiendo una presencia y control estatal significativos. Si bien las dinámicas de seguridad siempre han

sido complejas, la situación actual se ve aún más desestabilizada por el comportamiento adaptativo de los grupos criminales, que reconfiguran constantemente las reglas de juego, imponen nuevas formas de control territorial y cooptan proyectos estatales e inversiones públicas. “En áreas bajo influencia de disidencias de las Farc,<sup>23</sup> solo avanzan los proyectos que ellas aprueban,” señaló un profesional que trabaja en iniciativas comunitarias.

El archipiélago regulatorio en la Amazonía colombiana varía considerablemente entre regiones, debido a la presencia estatal desigual, las disparidades socioeconómicas y la influencia de grupos armados ilegales. En áreas que estuvieron durante años bajo el control de las Farc, predominaba un conjunto de directrices impuestas por la guerrilla. Hoy, sin embargo, múltiples grupos imponen códigos divergentes: algunos permiten con reticencia las intervenciones estatales, mientras que otros las prohíben totalmente. El resultado es un territorio impredecible, donde autoridades gubernamentales, actores armados ilegales e instituciones comunitarias informales compiten por el control. Las facciones criminales agravan la volatilidad económica y el daño ambiental mediante minería ilegal de oro, tala sin permisos y extorsión a negocios y productores locales.

El tejido social de la Amazonía colombiana hace más desafiantes la aplicación de un modelo único de gobernanza. Aunque la presencia histórica del Estado ha sido débil, los pueblos indígenas y las organizaciones comunitarias locales han desarrollado sus propios sistemas de gobernanza. Estos marcos han demostrado ser resilientes y, en muchos casos, más eficaces en la gestión de recursos y la protección de los territorios. Sin embargo, están siendo cada vez más socavados por el avance de actores ilegales. A pesar de que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos, representó un hito jurídico, su implementación sigue siendo frágil.<sup>24</sup> En muchos territorios indígenas, la gobernanza formal y la consuetudinaria coexisten bajo presión criminal, lo que debilita su autoridad.

Un fenómeno paradójico atraviesa la región. Entidades estatales, donantes y organizaciones de la sociedad civil canalizan recursos hacia plataformas de coordinación, planes estratégicos e iniciativas multiactor, y sin embargo, las economías ilícitas persisten y se adaptan con facilidad. Cada nueva política parece incentivar no el cumplimiento, sino la innovación ilegal y criminal. La brecha persistente entre formulación regulatoria y capacidad de aplicación vuelve ineficaces muchos marcos legales, dejando a comunidades y ecosistemas en situación de vulnerabilidad.

La falta de integración entre medidas de seguridad pública, reforma judicial y protección de derechos humanos exige una revisión profunda de las estrategias para fortalecer el Estado de derecho. Sin una intervención rápida y coordinada, la Amazonía se encamina hacia un punto de inflexión ecológico y social, con consecuencias graves para los bosques y los millones de personas que dependen de ellos.

La región amazónica enfrenta riesgos graves derivados de la deforestación ilegal, impulsada por la ganadería extensiva, redes criminales, el acaparamiento de tierras y actividades extractivas como la minería ilegal. La débil respuesta gubernamental, sumada a la cooptación de instituciones locales por parte de ciertas élites y actores con poder,<sup>25</sup> agrava tanto la degradación ambiental como las tensiones sociales.<sup>26</sup>

En las comunidades indígenas y locales, la llegada de recursos mal gestionados ha intensificado divisiones internas, lo que aumenta la inestabilidad. A esto se suma la extorsión ejercida por facciones criminales, que amenaza tanto a proyectos comunitarios como a inversiones privadas. Junto con la presión de la demanda global de *commodities* y la acción del crimen transnacional, estos factores configuran un entorno altamente complejo e inestable que obstaculiza el desarrollo sostenible y desalienta la inversión en toda la región.<sup>27</sup>

El crimen organizado y los grupos armados dominan actualmente amplias áreas de la Amazonía colombiana, imponiendo una especie de gobernanza paralela o “criminal” mediante extorsiones, puestos de control y poder de veto sobre los proyectos. Muchos de estos grupos ejercen funciones que corresponderían al Estado, como restricciones a la movilidad, control sobre la ejecución de proyectos y cobro de rentas (ilegales). “Esto lo frena todo”, comentó un trabajador ambiental. “La gente se asusta y deja de participar.”

Financiados por el narcotráfico, la tala y la minería ilegales, estos grupos desplazan a las autoridades oficiales y, en algunos casos, cooptan tanto a líderes comunitarios y a guardias indígenas. Las disputas internas entre facciones y los ceses al fuego improvisados dificultan aún más la aplicación sostenida de la ley, mientras que los grupos armados utilizan la deforestación como moneda de cambio en sus negociaciones con Bogotá.

A pesar de la mejora en los sistemas de monitoreo y de la disponibilidad de nuevas herramientas regulatorias, las agencias nacionales y estatales carecen de dirección estratégica y presencia territorial para enfrentar estas amenazas. Las fuerzas militares y policiales, mal equipadas y escasas, no cuentan con la movilidad ni los recursos adecuados, y lo más grave: la Amazonía sigue siendo una baja prioridad para ambas.

Los mecanismos de gobernanza transnacional débiles y las regulaciones internas inconsistentes agravan aún más estos riesgos. La falta de marcos internacionales sólidos para combatir los delitos ambientales permite que recursos ilegales, como el oro, ingresen a los mercados globales a través de países con controles regulatorios laxos, lo que incrementa los riesgos reputacionales para los inversores.

A nivel nacional, las regulaciones poco claras e incoherentes socavan la confianza institucional y dificultan el cumplimiento, especialmente en territorios indígenas y regiones fronterizas. Por ejemplo, la ausencia de normas claras sobre los mercados de carbono deja a las comunidades vulnerables y permite que algunas empresas actúen bajo reglas autoimpuestas.

La precariedad económica y los déficits de infraestructura están estrechamente ligados a la limitada presencia del Estado. La región carece de condiciones básicas para sostener alternativas duraderas y a gran escala, como el manejo forestal sostenible, el ecoturismo o los emprendimientos bioeconómicos. “Hay pequeñas iniciativas dispersas”, explicó un funcionario de desarrollo, “pero no son suficientes para cambiar la trayectoria.” Sin inversión pública focalizada y políticas adaptadas al contexto local, la resiliencia comunitaria sigue fuera de alcance.

Mientras tanto, la construcción informal e ilegal de carreteras ha abierto el acceso a zonas remotas del bosque, facilitando el ingreso de nuevos asentamientos y actividades extractivas que aceleran la deforestación. Los grupos armados se adelantan a los equipos estatales de catastro y planificación, imponiendo su control sobre el territorio y generando nuevas tensiones.

Muchos pequeños productores ven en la reforma agraria y en programas como la Reforma Rural Integral<sup>28</sup> una oportunidad para acceder a tierra y mejorar sus condiciones de vida, aunque los avances han sido limitados. Por su parte, los pueblos indígenas insisten en la ampliación y el reconocimiento legal de sus territorios, respaldados en algunos casos por decisiones judiciales. Una pieza clave para ambos sectores — el Catastro Multipropósito<sup>29</sup>, destinado a actualizar y clarificar la información sobre la propiedad de la tierra — sigue pendiente de plena implementación, lo que mantiene la inseguridad jurídica y frena la planificación territorial.

Las debilidades regulatorias en la Amazonía colombiana debilitan gravemente la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, permitiendo que actores ilícitos ignoren los mandatos formales. Aunque las nuevas regulaciones ambientales han representado un cierto avance, su implementación desigual y los recursos limitados las han dejado vacías de efecto. En la mayoría de las zonas de frontera, la presencia institucional es casi inexistente: jueces, guardaparques y fiscales carecen de herramientas reales para sancionar a los infractores o dismantelar redes criminales. Las fuerzas de seguridad, mal equipadas, con poca movilidad, presupuestos escasos y un mandato centrado en áreas urbanas, dejan sin control efectivo las economías ilegales en la región.

**Figura 3.** Resumen de los principales riesgos y factores identificados por los entrevistados en Colombia. (n=16)

Riesgo	Descripción
<b>Gobernanza criminal y control territorial</b>	En varios territorios, grupos armados y redes criminales ejercen control social y territorial mediante cobros extorsivos, restricciones de movilidad y la imposición de vetos a iniciativas externas. Estas dinámicas, combinadas con disputas internas y estructuras de liderazgo poco transparentes, generan altos niveles de incertidumbre y riesgo para la implementación de proyectos, la prestación de servicios y la gobernanza local.
<b>Deforestación ilegal</b>	El acaparamiento de tierras y la tala indiscriminada ejercen presión sobre las comunidades y fragmentan hábitats, mientras la respuesta gubernamental sigue siendo parcial, con recursos escasos y sin una estrategia integral.
<b>Extorsión e intimidación</b>	Las redes criminales extorsionan y capturan fondos de comunidades indígenas, agricultores y pequeños negocios. También obligan a inversores y grandes empresas a contemplar pagos por protección y seguridad privada en sus costos operativos.
<b>Delitos ambientales y economías ilegales</b>	El alza del precio del oro impulsa la minería no regulada, lo que acelera la deforestación, debilita las economías legales y rompe la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía. Esta actividad erosiona las economías legales, financia redes criminales y fragmenta corredores ecológicos esenciales que conectan los Andes con la Amazonía.
<b>Captura de instituciones regulatorias</b>	Élites locales vinculadas al acaparamiento de tierras y a economías ilícitas manipulan decisiones de licenciamiento y fiscalización para proteger sus intereses, debilitando la gobernanza ambiental.
<b>Tensiones de gobernanza intra-comunitaria</b>	La llegada de ingresos por proyectos — como los pagos por créditos de carbono — generan en algunos casos disputas por la asignación de fondos y el liderazgo dentro de comunidades indígenas y tradicionales.
<b>Déficits de aplicación de la ley</b>	El Estado carece de dirección estratégica y capacidad operativa: fuerzas de seguridad con pocos recursos y escasa movilidad dejan extensas áreas fuera del alcance del Estado de derecho.

Factor	Descripción
<b>Debilidad regulatoria</b>	Existen nuevas leyes ambientales, pero su implementación es desigual, con poco personal y sin capacidad real de sancionar a redes criminales o infracciones ambientales, lo que las vuelve en gran parte simbólicas.
<b>Déficit económico y de infraestructura</b>	La escasez de caminos, redes eléctricas y conectividad digital — junto con la ausencia de infraestructura para proyectos a gran escala — dificulta el desarrollo de bioeconomías y manejo forestal sostenible, atrapando a las comunidades en medios de vida extractivos.
<b>Corrupción y opacidad</b>	La falta de transparencia en esquemas de créditos de carbono y “soluciones basadas en la naturaleza” genera desconfianza cuando las comunidades no ven los beneficios prometidos. Algunas iniciativas bioeconómicas también carecen de claridad en su gestión.
<b>Demanda impulsada por materias primas</b>	La demanda global de carne, cocaína, madera y oro impulsa el cambio en el uso del suelo y la deforestación, exponiendo a los inversores a riesgos regulatorios y reputacionales. La débil aplicación de compromisos para cadenas de suministro libres de deforestación agrava estos problemas.
<b>Crimen ambiental transnacional</b>	Organizaciones criminales transfronterizas combinan economías ilícitas (minería, tala, caza furtiva y narcotráfico) con inversiones legales para lavar ganancias, afianzando una “gobernanza criminal” paralela en la Amazonía.
<b>Gobernanza transnacional débil</b>	La falta de marcos internacionales sólidos contra el crimen ambiental permite que recursos ilegales ingresen a los mercados globales. La débil cooperación transfronteriza fortalece aún más a las redes criminales.
<b>Inconsistencia regulatoria</b>	Las normas fluctuantes y superpuestas entre legislaciones nacionales, normas indígenas y ordenanzas municipales dificultan la aplicación efectiva y erosionan la confianza en las instituciones.

## Sección IV. Mapeo de riesgos de seguridad territoriales y regulatorios en la Amazonía

La Amazonía enfrenta una serie de desafíos complejos en materia de seguridad territorial y regulatoria. Para comprender mejor estas amenazas y abordarlas de manera más eficaz, se llevó a cabo una encuesta en línea estructurada entre marzo y mayo de 2025, dirigida a personas seleccionadas estratégicamente en Brasil y Colombia. Administrada en portugués y español,<sup>30</sup> la encuesta fue diseñada para recopilar de forma sistemática información accionable sobre las dinámicas de seguridad, identificar riesgos críticos y factores estructurales, y documentar estrategias prácticas empleadas por actores locales para mitigar estas amenazas. Se enfocó en dos grupos principales: instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil, así como emprendedores privados y líderes empresariales activos en la región.

Se contactó a 550 personas en Brasil y 217 en Colombia, obteniendo 57 respuestas completas en Brasil y 31 adicionales en Colombia, lo que permitió recoger perspectivas fundamentales de actores directamente involucrados en la seguridad y sostenibilidad amazónica.<sup>31</sup> Si bien el tamaño de la muestra y las tasas de respuesta son limitados, lo que restringe la posibilidad de generalizaciones estadísticas amplias, los hallazgos ofrecen valiosas perspectivas cualitativas y descriptivas. Así mismo, ponen de relieve las experiencias vividas y las estrategias locales de expertos y profesionales que operan en áreas desatendidas y vulnerables de la Amazonía.

En Brasil, los participantes estaban principalmente concentrados en los nueve estados que conforman la Amazonía Legal, especialmente en Amazonas y Pará.<sup>32</sup> En el caso de Amazonas, los encuestados estaban basados en centros urbanos como Manaus y en cuencas fluviales estratégicas como el Juruá y el Purus.<sup>33</sup> En Pará, los participantes estaban vinculados a iniciativas en territorios como Belém, Marabá, Santarém y Alter do Chão, así como en la cuenca del Tapajós, territorios del Xingu, el Nordeste Paraense y el archipiélago de Marajó. Hubo menos respuestas provenientes de Acre, Amapá, Rondônia y Roraima, en su mayoría relacionadas con corredores ecológicos clave. También participaron encuestados de Maranhão, Tocantins y Mato Grosso, algunos de los cuales trabajan en áreas de transición entre la Amazonía y el bioma del Cerrado. Además, varias respuestas mencionaron operaciones en áreas no amazónicas, especialmente São Paulo, Minas Gerais, Bahía y Rio Grande do Sul, reflejando redes nacionales más amplias y sedes organizacionales ubicadas fuera de la región amazónica.

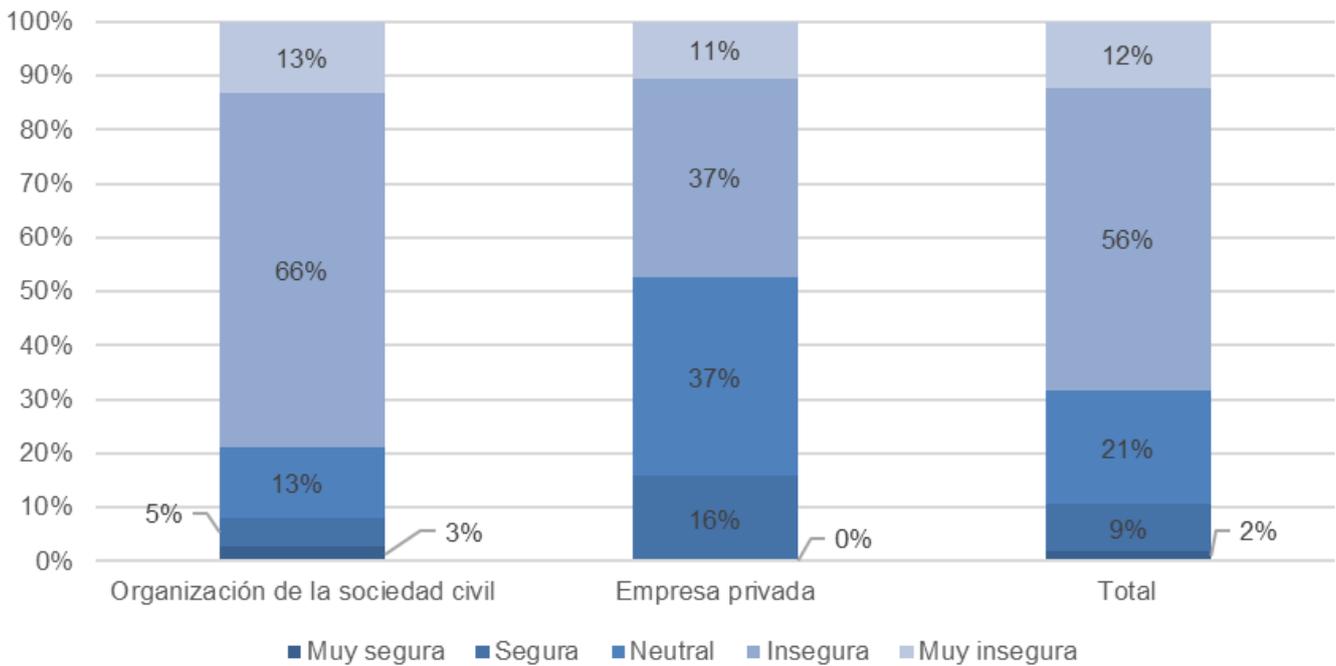
En Colombia, la mayoría de los encuestados reportaron actividades centradas principalmente en departamentos amazónicos. Se destacó Amazonas, con numerosos proyectos enfocados en Leticia y en iniciativas ecológicas transfronterizas. También se señaló a Caquetá como una región crítica para el uso sostenible del suelo y los esfuerzos de conservación, especialmente a lo largo del río Caquetá, en áreas como El Doncello y Puerto Córdoba. Asimismo, se reportaron actividades en Guaviare, Putumayo y Meta, relacionadas con la gobernanza forestal, los territorios indígenas y la gestión sostenible de recursos. Departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada participaron principalmente en iniciativas regionales o interdepartamentales. Un grupo más pequeño de encuestados operaba desde departamentos no amazónicos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Córdoba, Valle del Cauca, Atlántico y Nariño, coordinando programas a nivel nacional o apoyando esfuerzos orientados a la Amazonía de manera remota.

## Resultados de la encuesta en Brasil

Más de la mitad de los encuestados brasileños expresaron preocupaciones significativas sobre su seguridad en los territorios donde operan en la Amazonía: El 56% declaró sentirse inseguro, y un 12% adicional manifestó sentirse muy inseguro (ver Figura 4). De forma crítica, las percepciones de inseguridad fueron especialmente altas entre organizaciones de

la sociedad civil (incluyendo organizaciones no gubernamentales - ONGs) e instituciones de investigación, donde aproximadamente dos tercios (66%) reportaron un alto nivel de preocupación. En contraste, los encuestados del sector privado manifestaron una sensación de vulnerabilidad algo menor, con un 37% calificando su situación de seguridad como neutral, lo que refleja percepciones divergentes de riesgo, moldeadas por los diferentes roles, niveles de exposición y cercanía a las amenazas en el territorio.

**Figura 4.** ¿Qué tan seguras considera las áreas geográficas de la Amazonía donde opera su organización? (n=57)



Los encuestados brasileños ofrecieron perspectivas reveladoras al ser consultados sobre qué actores influyen más significativamente en las dinámicas de seguridad en los territorios donde operan. Utilizando una escala de 1 (sin influencia) a 5 (altamente influyentes), los participantes ubicaron a las autoridades políticas locales como las de mayor influencia, seguidas por los gobiernos estatales y nacionales (ver Figura 5). Las organizaciones indígenas y las fuerzas de seguridad oficiales también fueron consideradas como actores de influencia

sustancial, mientras que las fuerzas de seguridad estatales fueron valoradas con menor peso. Es particularmente llamativo que los grupos armados ilegales también recibieron puntuaciones comparativamente altas, lo que refleja una realidad preocupante. Estos hallazgos ilustran con claridad la compleja interacción de actores que configura la seguridad en la Amazonía, un territorio en disputa donde la gobernanza formal, el liderazgo indígena, los aparatos estatales de seguridad y las entidades ilícitas coexisten en un equilibrio delicado y con frecuencia volátil.

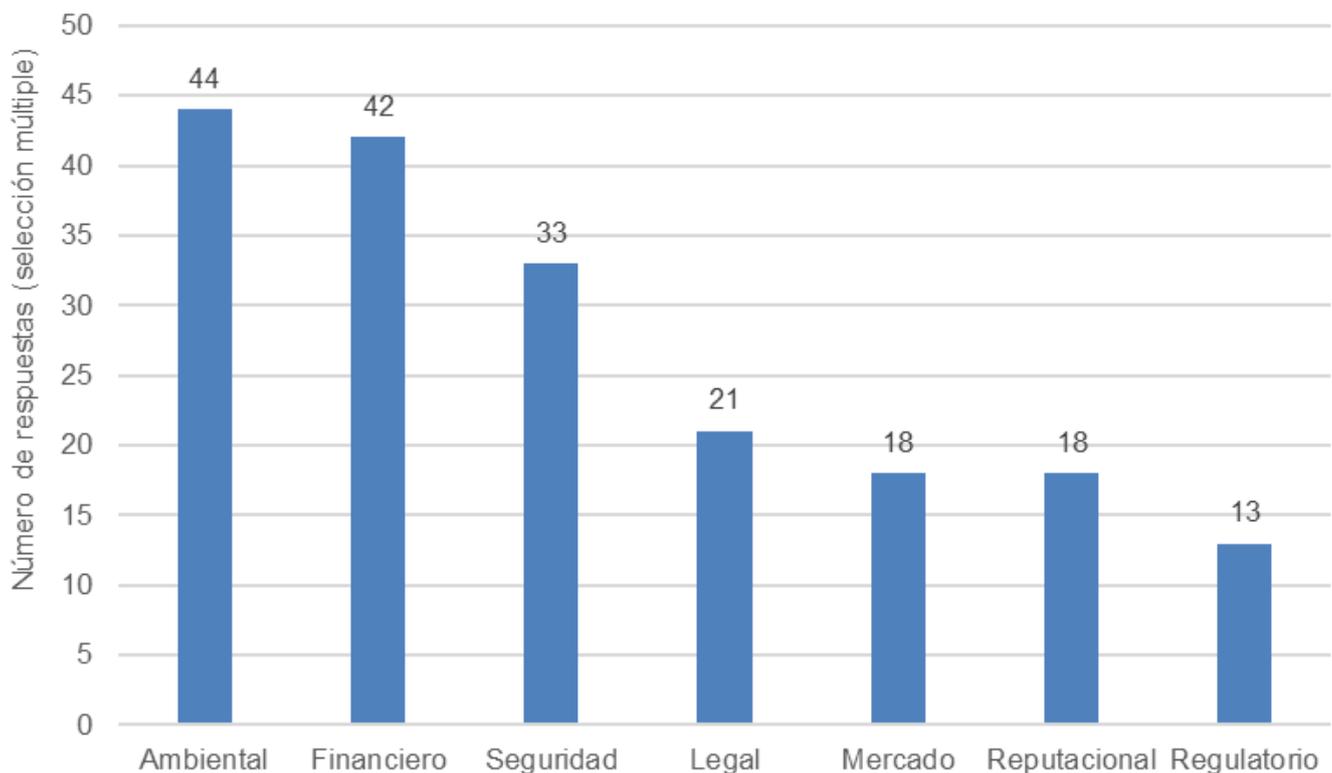
**Figura 5.** ¿Qué actores tienen mayor influencia en la dinámica de seguridad de las áreas geográficas donde opera su organización (de manera positiva o negativa)? (n=57)



Al ser consultados sobre los riesgos más significativos que impactan sus operaciones en la región amazónica, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia los riesgos ambientales, incluyendo desastres naturales, cambio climático y degradación ambiental, como su principal preocupación (44 de 57 respuestas). Los riesgos financieros, que abarcan la inestabilidad económica, la escasez de financiamiento y las interrupciones en el flujo de caja, ocuparon el segundo lugar, con 42 menciones. Los riesgos de seguridad, que incluyen amenazas relacionadas con el crimen, la violencia y la inestabilidad política, fueron

destacados por 33 encuestados. Otros tipos de riesgos fueron citados con menor frecuencia, aunque de forma significativa: los riesgos legales, como demandas judiciales o disputas contractuales, fueron mencionados por 21 personas; los riesgos reputacionales y los riesgos de mercado, cada uno con 18 menciones, estuvieron asociados a preocupaciones por publicidad negativa y condiciones económicas cambiantes, respectivamente y, por último, los riesgos regulatorios, vinculados a sanciones o incumplimientos regulatorios, fueron los menos reportados, apareciendo en solo 13 respuestas (ver Figura 6).

**Figura 6.** ¿Cuáles son los tipos de riesgos más significativos que impactan o podrían afectar las operaciones de su organización en los proyectos e iniciativas que desarrolla en la región amazónica? (n=189)

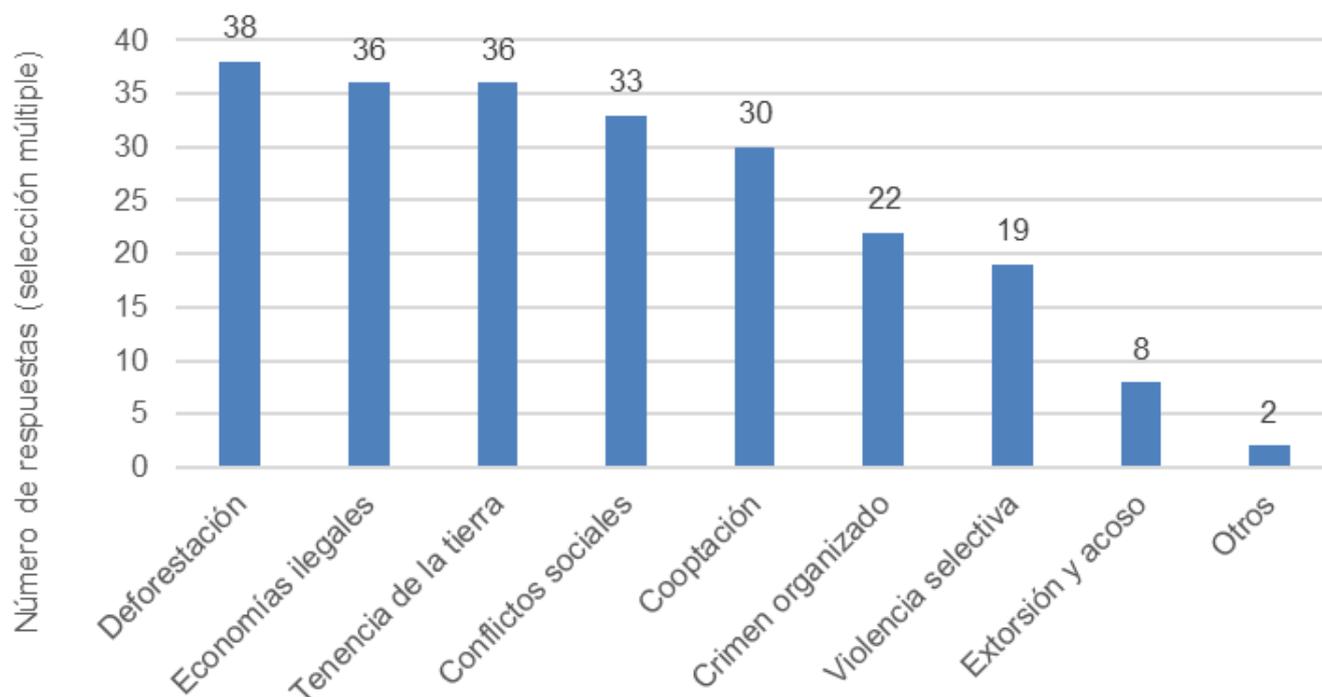


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Las organizaciones que operan en la Amazonía brasileña identifican la deforestación ilegal, relacionada con la tala no regulada, la limpieza de tierras (*desmonte*) y la extracción de recursos, como su riesgo de seguridad más apremiante, citada por 38 de 57 encuestados. También destacaron con frecuencia una serie de preocupaciones interconectadas, entre ellas: la inseguridad jurídica y de la tenencia de la tierra, impulsada por títulos superpuestos o derechos de propiedad poco claros; las economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre; la

captura de élites y la cooptación de instituciones regulatorias locales; y los conflictos sociales, especialmente las disputas por el uso del suelo con comunidades indígenas y locales. Las amenazas directas relacionadas con el control territorial por parte de grupos armados u organizaciones criminales, incluyendo violencia selectiva, extorsión, acoso e intimidación, fueron reportadas con menor frecuencia, lo que sugiere que, aunque graves, tienden a ser más localizadas y específicas al contexto regional en el que operan estas organizaciones (ver Figura 7).

**Figura 7.** ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad que impactan directamente las actividades de su organización? (n=224)

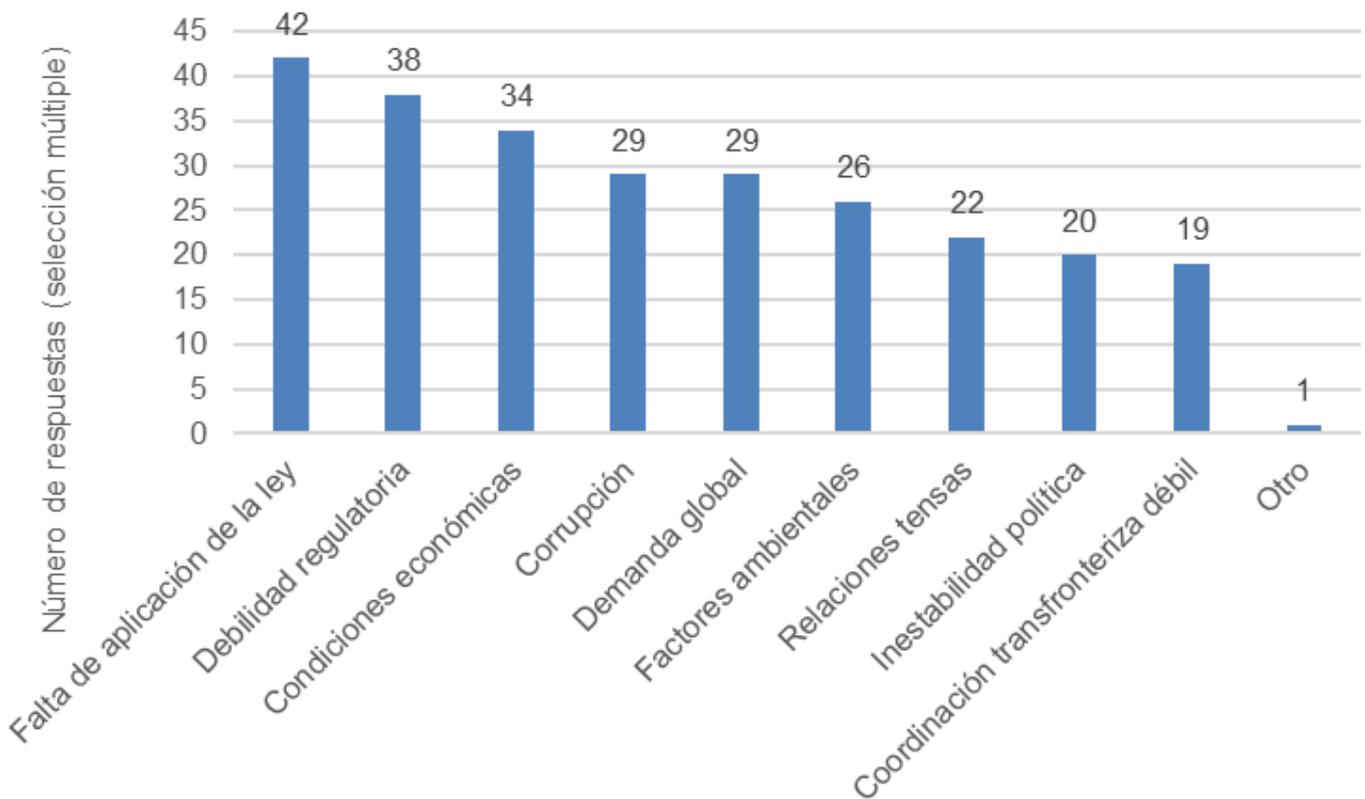


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Los encuestados brasileños identifican claramente que los riesgos de seguridad en la Amazonía están profundamente arraigados en debilidades institucionales. La falta de aplicación de la ley, citada por 42 de 57 participantes, surgió como el principal factor que impulsa la inseguridad (ver Figura 8). Otros factores estrechamente relacionados incluyen: la debilidad regulatoria, marcada por marcos legales inadecuados o mal aplicados; y la precariedad económica generalizada, caracterizada por pobreza, desempleo e infraestructura deficiente. Los encuestados

también destacaron de forma significativa la corrupción y la falta de transparencia, señalando cómo el soborno y la rendición de cuentas comprometida erosionan la gobernanza y agravan la vulnerabilidad. Otros temas como las tensiones con comunidades indígenas y locales, la limitada coordinación transfronteriza y la inestabilidad política fueron mencionados con menor frecuencia. Aunque siguen siendo relevantes, estos riesgos parecen más localizados o específicos al contexto, en comparación con los déficits estructurales y de gobernanza más amplios.

**Figura 8.** ¿Cuáles son los principales factores que impulsan estos riesgos? (n=260)

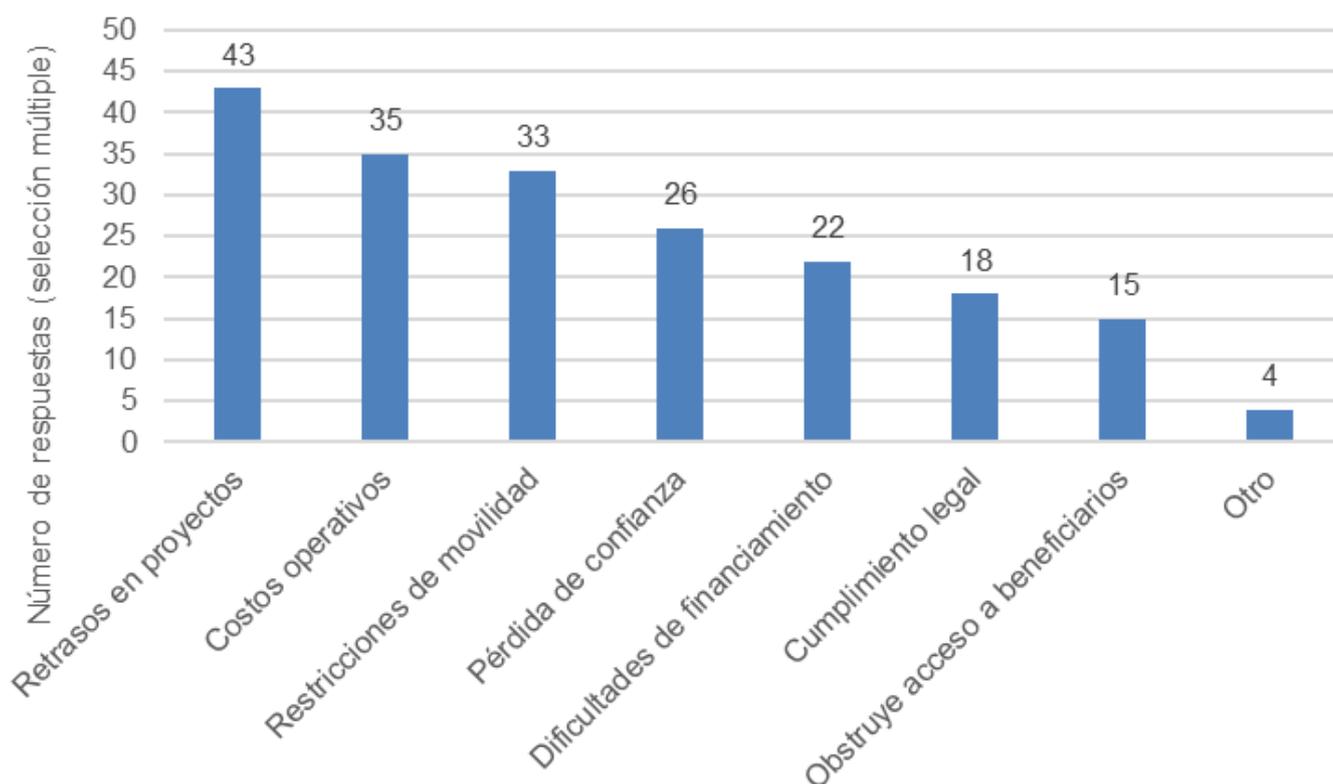


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Al ser consultadas sobre cómo los riesgos mencionados impactan las actividades de sus organizaciones (Figura 9), reportaron mayoritariamente que los riesgos de seguridad, regulatorios y ambientales conducen con mayor frecuencia a retrasos en la ejecución de proyectos o programas. Al menos 43 de los 57 encuestados observaron que esta inestabilidad altera los cronogramas de implementación y la planificación. Entre las consecuencias estrechamente relacionadas se encuentran: el aumento de los costos operativos, ya que las organizaciones deben adaptarse a condiciones volátiles; y la movilidad restringida

del personal, los recursos y los productos, reflejo de obstáculos logísticos y de seguridad tangibles. Con menor frecuencia, aunque de manera significativa, los encuestados identificaron otros impactos, como: dificultades de acceso a beneficiarios, problemas para asegurar financiamiento, y retos legales o de cumplimiento regulatorio, todos los cuales aumentan las cargas operativas. En conjunto, estos impactos ilustran vívidamente cómo la inseguridad e inestabilidad persistentes comprometen seriamente la eficiencia operativa, la eficacia y la sostenibilidad de las acciones en la Amazonía.

**Figura 9.** ¿Cómo impactan estos riesgos las actividades de su organización? (n=196)

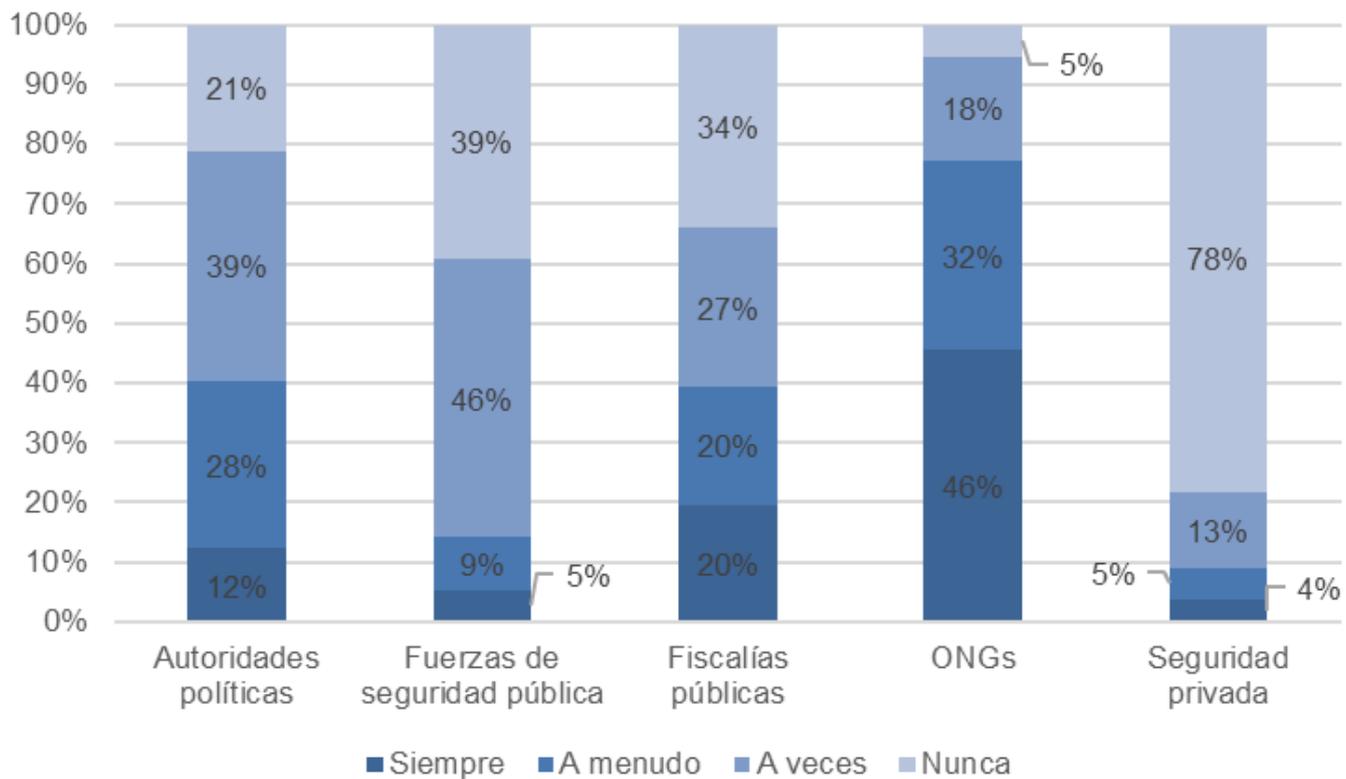


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Las respuestas revelan un panorama altamente desigual de colaboración frente a los desafíos de seguridad en la Amazonía. Las ONG surgieron como los actores más involucrados de forma constante: el 46% de los encuestados indicó que “siempre” colaboran con ellas, mientras que solo un 5% afirmó que “nunca” lo hace (ver Figura 10). En cambio, la cooperación con empresas de seguridad privada es notablemente infrecuente: el 78% señaló que “nunca” interactúa con estos actores, lo que subraya su papel mínimo en el abordaje de la

inseguridad regional. Las relaciones con las fuerzas de seguridad pública, incluidas la policía y el ejército, siguen siendo débiles: el 86% informó que dicha colaboración ocurre solo “a veces” o “nunca”, lo que evidencia una limitada alineación institucional. Las interacciones con autoridades políticas electas aparecen como irregulares y poco sistemáticas, siendo la respuesta más común “a veces” (39%). La colaboración con fiscales públicos mostró una variabilidad considerable entre los encuestados, reflejando relaciones diversas y dependientes del contexto.

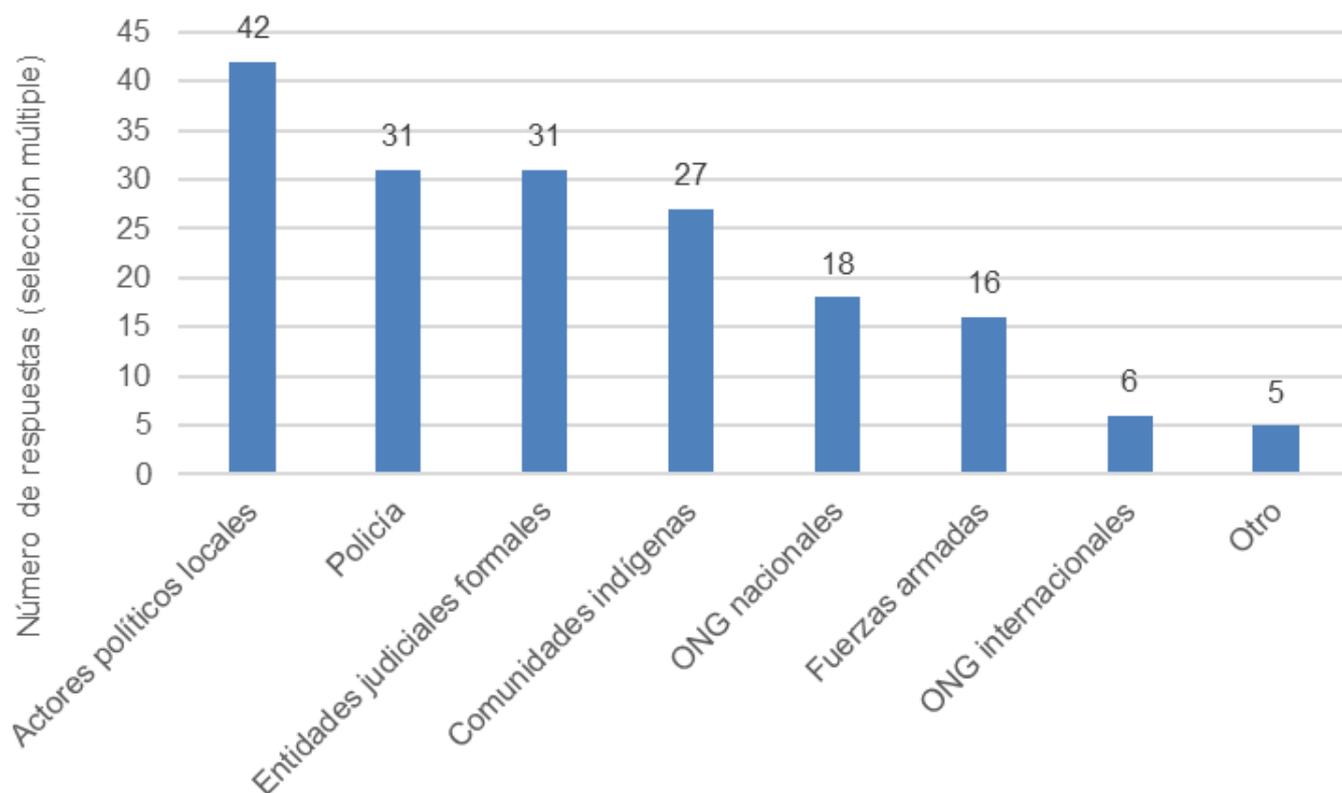
**Figura 10.** ¿Con qué frecuencia colabora su organización con los siguientes actores para abordar desafíos de seguridad? (n=57)



Los encuestados priorizan claramente a los actores políticos locales como los más relevantes para promover la seguridad y el estado de derecho en la Amazonía, siendo seleccionados por 42 de los 57 participantes, seguidos de cerca por las entidades judiciales formales — incluidas fiscalías, jueces, defensores públicos y fuerzas de seguridad —, lo que subraya la centralidad atribuida a las instituciones estatales oficiales (ver Figura 11). En contraste, las organizaciones indígenas y comunitarias, así como las ONG nacionales e internacionales, fueron considerablemente

menos citadas, lo que indica que, pese a su activa presencia y frecuente colaboración, no se las percibe como estructuralmente influyentes. Los actores militares, a pesar de su presencia territorial, se ubicaron entre los menos seleccionados. Esta brecha entre la frecuencia de colaboración con actores de base y ONG y su percepción de influencia sobre los resultados de gobernanza y seguridad revela un reconocimiento implícito por parte de los encuestados: por desafiantes que sean, fortalecer los vínculos con instituciones políticas y judiciales formales se considera esencial.

**Figura 11.** Seleccione los tres actores más importantes en la promoción de la seguridad y el estado de derecho en las áreas donde opera su organización. (n=176)

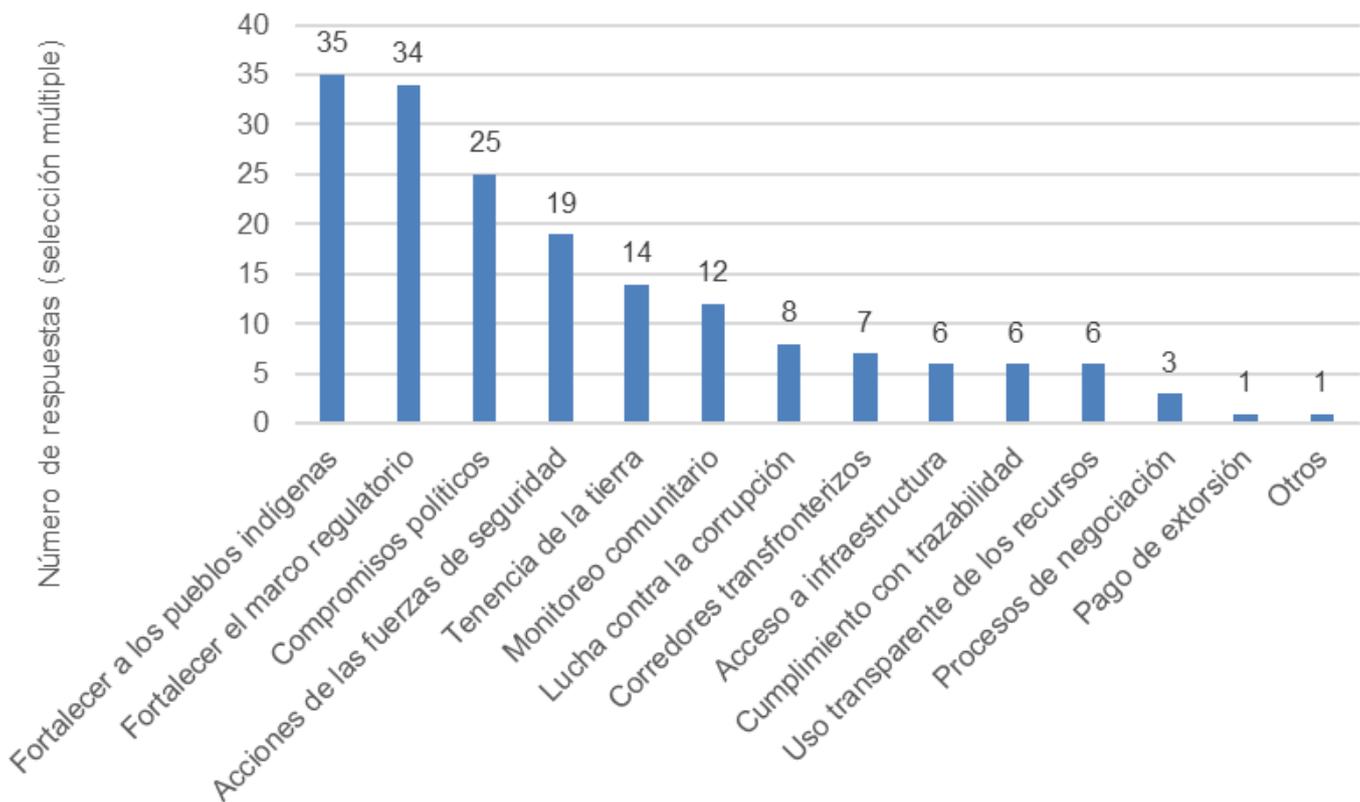


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Los encuestados brasileños enfatizaron soluciones estructurales e institucionales como los mecanismos más eficaces para mitigar los riesgos de seguridad en la Amazonía (ver Figura 12). Destacaron la capacitación y el empoderamiento de las comunidades indígenas y locales, el fortalecimiento de los marcos regulatorios ambientales y el compromiso político sostenido a nivel regional, nacional y subnacional. De forma significativa, las estrategias informales o

extralegales, como negociar con grupos armados o ceder ante la extorsión, fueron abrumadoramente rechazadas, con solo un encuestado respaldando este tipo de enfoque. Esta preferencia resalta con claridad una visión colectiva: la seguridad sostenible es inseparable de una gobernanza inclusiva, instituciones jurídicas sólidas y una participación comunitaria significativa, en lugar de depender de medidas coercitivas o soluciones de corto plazo.

**Figura 12.** Seleccione las tres acciones más eficaces para mitigar los riesgos de seguridad que podrían afectar las actividades de su organización. (n=176)

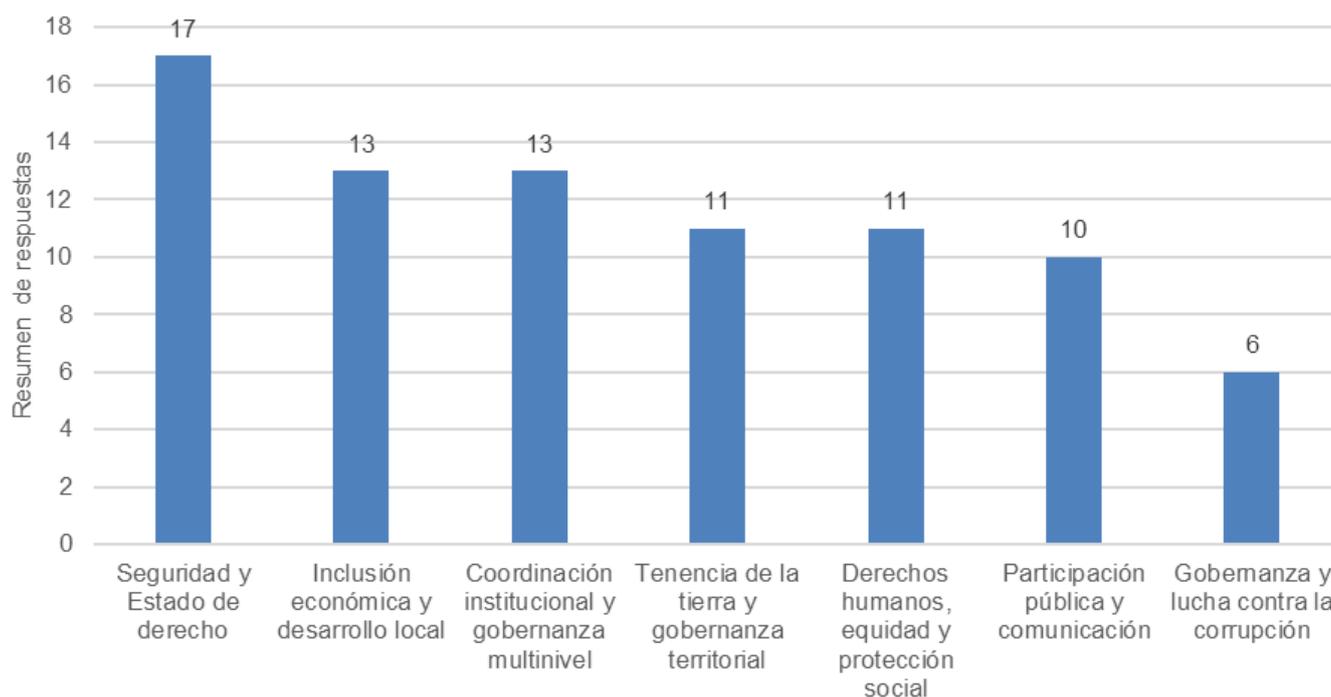


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Los encuestados enfatizan claramente la necesidad de un fortalecimiento integral de la gobernanza y de las estructuras de seguridad en la Amazonía, destacando como prioridades urgentes la mejora en la aplicación de la ley, el rigor judicial, las capacidades de inteligencia y el monitoreo territorial (ver Figura 13).<sup>34</sup> Las recomendaciones insisten en la necesidad de una presencia estatal más fuerte y coordinada entre los niveles federal, estatal y local, especialmente en territorios indígenas, áreas protegidas y regiones fronterizas estratégicas.

También se subraya la transparencia en la gestión de los recursos de seguridad, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas como elementos esenciales para una gobernanza eficaz. Además, los encuestados destacan la urgencia de proteger a los defensores ambientales y de derechos humanos, reforzar los servicios públicos en territorios marginados y ratificar acuerdos ambientales internacionales como una vía para consolidar la legitimidad y la eficacia del Estado en la región.

**Figura 13.** Si pudiera hacer recomendaciones a las autoridades federales, estatales o locales, ¿cuáles serían hasta tres acciones prioritarias para abordar los factores que generan inseguridad en las áreas donde opera su organización?

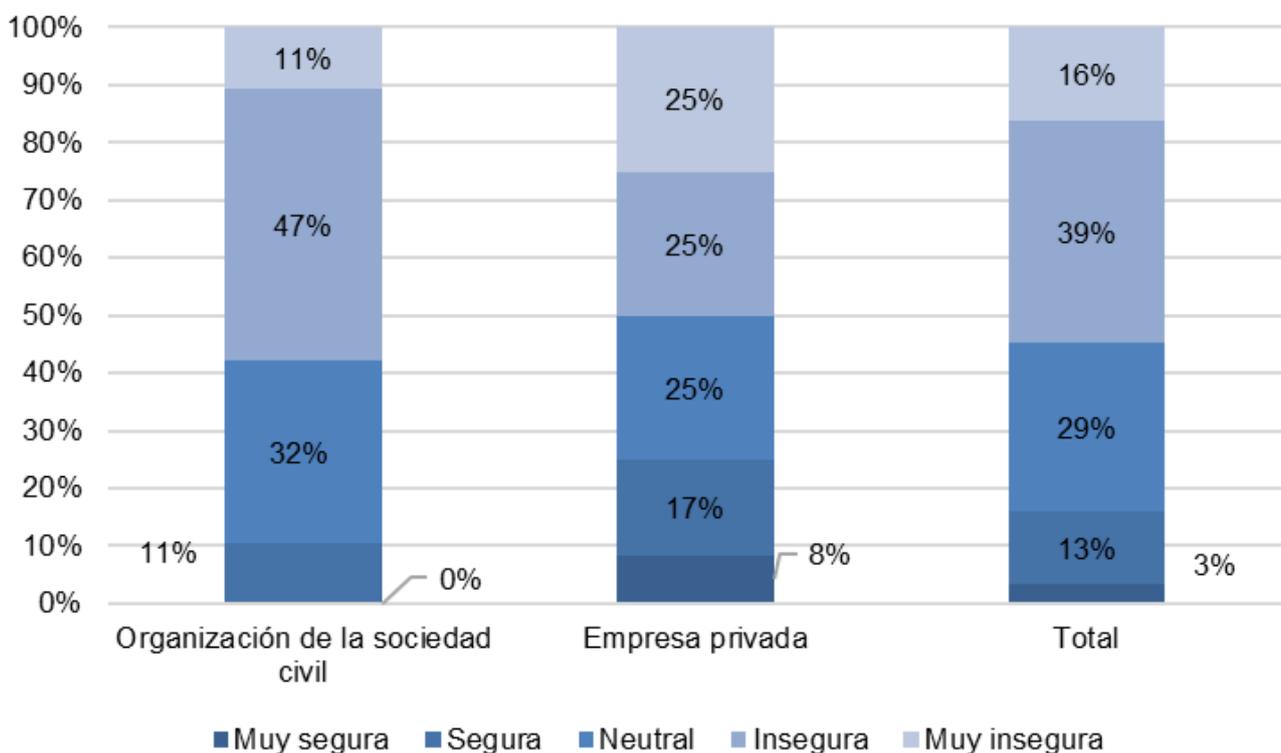


Junto con el fortalecimiento institucional, los encuestados abogaron ampliamente por un desarrollo económico inclusivo y sostenible como piedra angular de la estabilidad a largo plazo. Entre las propuestas destacan inversiones focalizadas en infraestructura, educación y alternativas económicas viables que fortalezcan a las comunidades locales, las cooperativas y, en particular, las iniciativas lideradas por mujeres. La aceleración de los procesos de titulación de tierras, la resolución de disputas territoriales y la clarificación de la gobernanza territorial surgieron como acciones críticas para mitigar conflictos y garantizar una gestión sostenible de los recursos. Asimismo, se enfatizó la importancia de la participación comunitaria desde abajo hacia arriba, el fortalecimiento del liderazgo local, la incorporación de conocimientos tradicionales y la implementación de mecanismos sólidos de control ciudadano como estrategias necesarias para lograr una seguridad significativa y duradera en la región.

## Resultados de la encuesta en Colombia

En Colombia, las percepciones de inseguridad entre los actores que operan en territorios vulnerables son significativas, aunque comparativamente más bajas que las reportadas en Brasil. En total, el 39% de los encuestados colombianos señaló sentirse inseguro y otro 16% muy inseguro, frente a cifras más altas en Brasil: 56% (inseguro) y 12% (muy inseguro), como se muestra en la Figura 14. Cabe destacar que las ONG en Colombia experimentan niveles de inseguridad más elevados, con un 47% que se siente inseguro y un 11% muy inseguro, en contraste con los actores del sector privado (25% inseguro, 25% muy inseguro). Esta tendencia refleja las condiciones observadas en Brasil, y pone de manifiesto que los actores de la sociedad civil en ambos países enfrentan sistemáticamente una mayor exposición y vulnerabilidad ante los riesgos territoriales, a pesar de las diferencias específicas entre contextos nacionales.

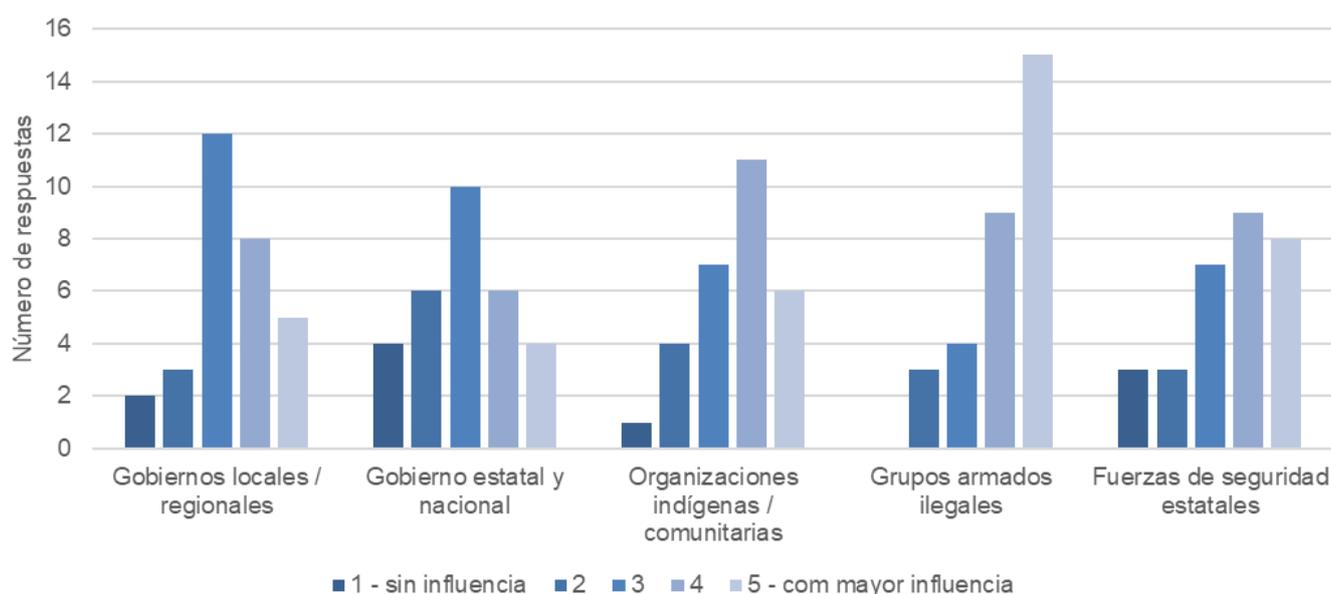
**Figura 14.** ¿Qué tan seguras considera las áreas geográficas de la Amazonía donde opera su organización? (n=31)



En Colombia, el panorama de seguridad está determinado en gran medida por la presencia de grupos armados ilegales, a quienes los encuestados identificaron como los actores más influyentes, seguidos de cerca por las comunidades indígenas (véase la Figura 15). En contraste, las instituciones formales — incluidas las autoridades locales y, en especial, los gobiernos estatales y nacionales— fueron evaluadas como menos influyentes. Esta percepción contrasta notablemente con

el caso de Brasil, donde los encuestados ubicaron de forma consistente a las instituciones estatales y a los actores políticos locales como los principales protagonistas. El caso colombiano revela así un escenario de gobernanza donde los actores no estatales y las estructuras comunitarias, más que las autoridades formales, definen las condiciones reales de seguridad y estabilidad territorial, lo cual subraya una divergencia crítica entre los dos contextos amazónicos.

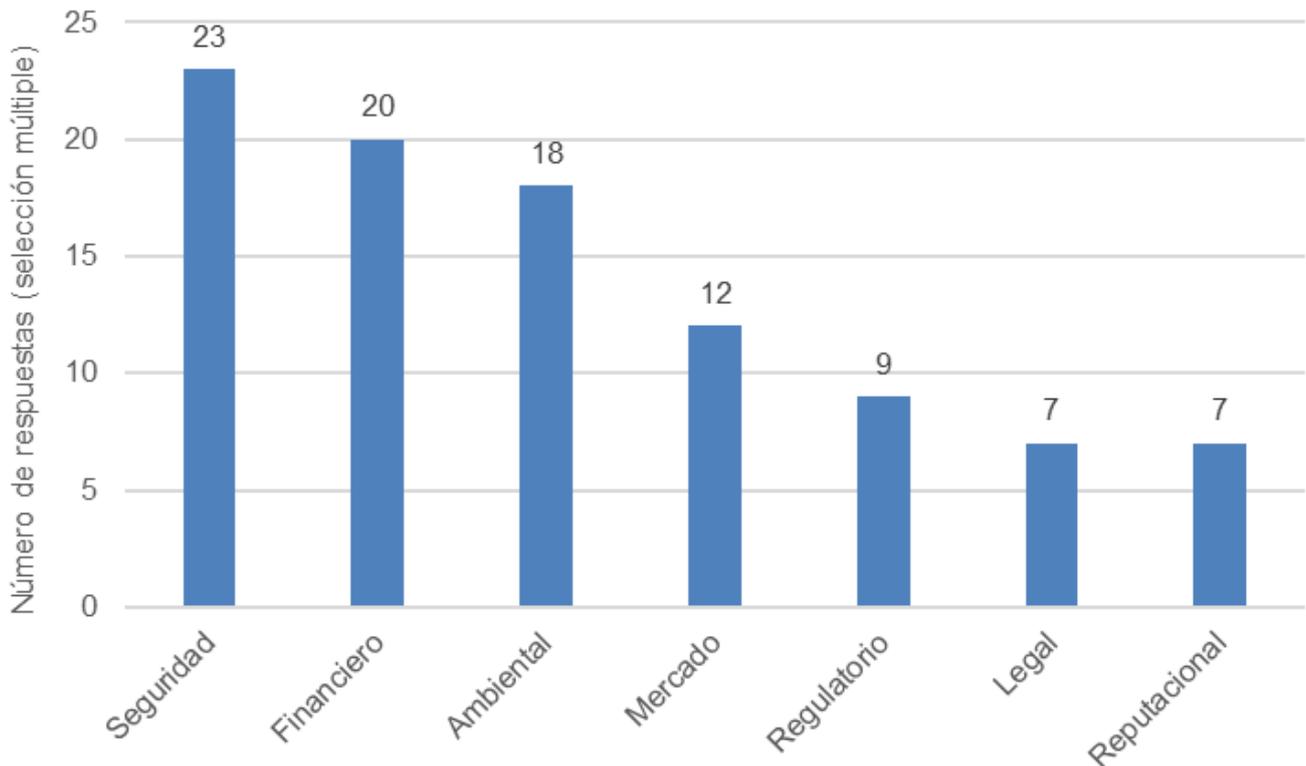
**Figura 15.** ¿Qué actores tienen mayor influencia en la dinámica de seguridad del territorio donde opera su organización (de manera positiva o negativa)? (n=31)



En Colombia, los encuestados destacaron las amenazas a la seguridad, incluyendo la violencia, el crimen y la inestabilidad política, como los riesgos más significativos en la región amazónica, señalados por 23 participantes (véase la Figura 16). Las vulnerabilidades financieras, como la inestabilidad económica y la falta de financiamiento, les siguieron de cerca (20 respuestas), mientras que los riesgos ambientales, incluidos desastres naturales y perturbaciones asociadas al cambio climático, también fueron mencionados con

frecuencia (18 respuestas). Los riesgos de mercado (12) y regulatorios (9) aparecieron con menor frecuencia, y los riesgos legales y reputacionales fueron los menos citados. Este patrón contrasta con el de Brasil, donde predominan las preocupaciones ambientales y financieras, lo que subraya una mayor vulnerabilidad de Colombia frente a la violencia, la presencia de mercados ilícitos y la volatilidad política, reflejando dinámicas territoriales y desafíos de gobernanza diferenciados en toda la cuenca amazónica.

**Figura 16.** ¿Cuáles son los tipos de riesgo más significativos que impactan o podrían impactar las operaciones de su organización en los proyectos e iniciativas que desarrolla en la Amazonía? (n=96)

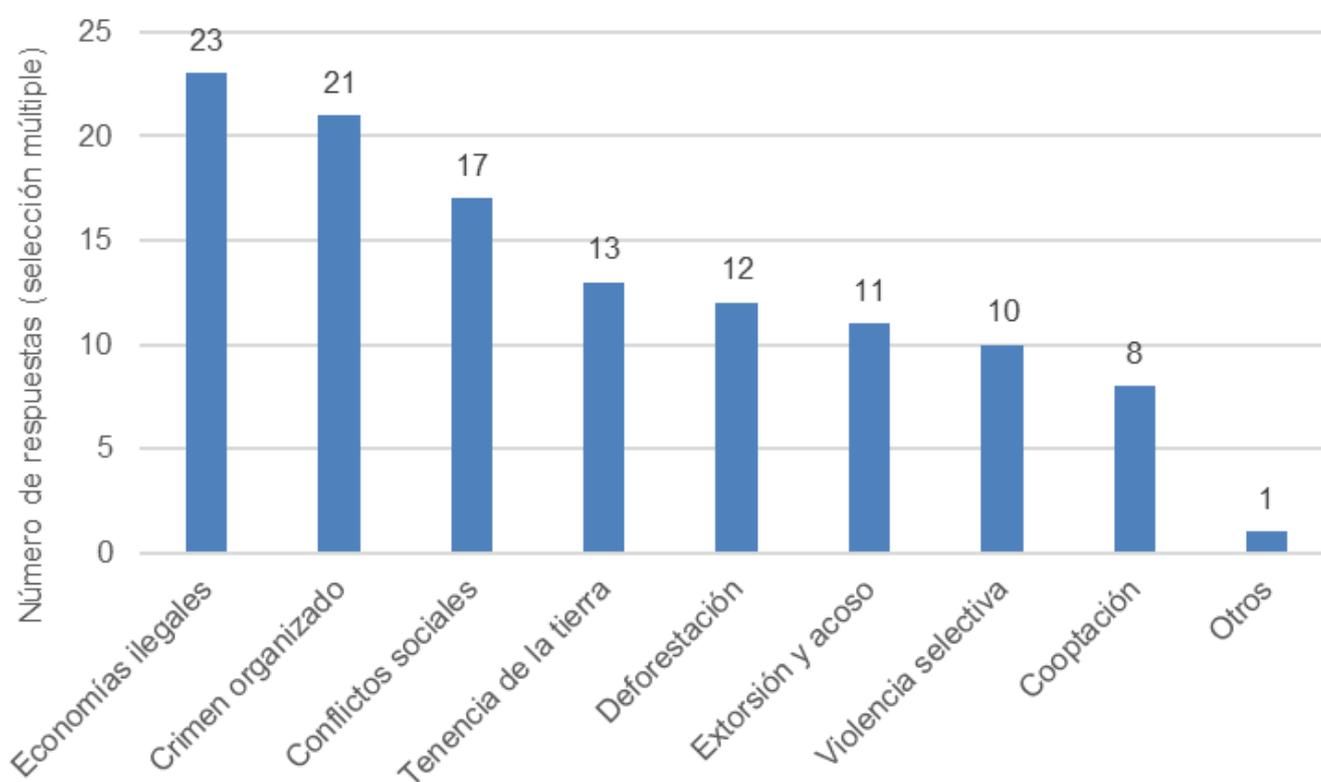


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

En Colombia, los riesgos de seguridad dominan las preocupaciones de las organizaciones que operan en la Amazonía, en particular aquellos vinculados a las economías ilegales (23 menciones), al crimen organizado (21 menciones) y a los conflictos sociales relacionados con disputas territoriales y tensiones comunitarias (17 menciones). A diferencia de Brasil, donde actualmente se destacan con mayor frecuencia la degradación ambiental y las vulnerabilidades

financieras, siendo la deforestación ilegal la principal amenaza identificada, el panorama de riesgos en Colombia refleja una concentración marcada de dinámicas violentas e ilícitas. Esta diferencia subraya cómo las brechas de gobernanza, la criminalidad extendida y la violencia localizada moldean de manera crítica las percepciones de inseguridad en Colombia, en contraste con el enfoque predominante de Brasil en torno a la degradación ecológica.

**Figura 17.** ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad que impactan directamente las actividades de su organización? (n=116)

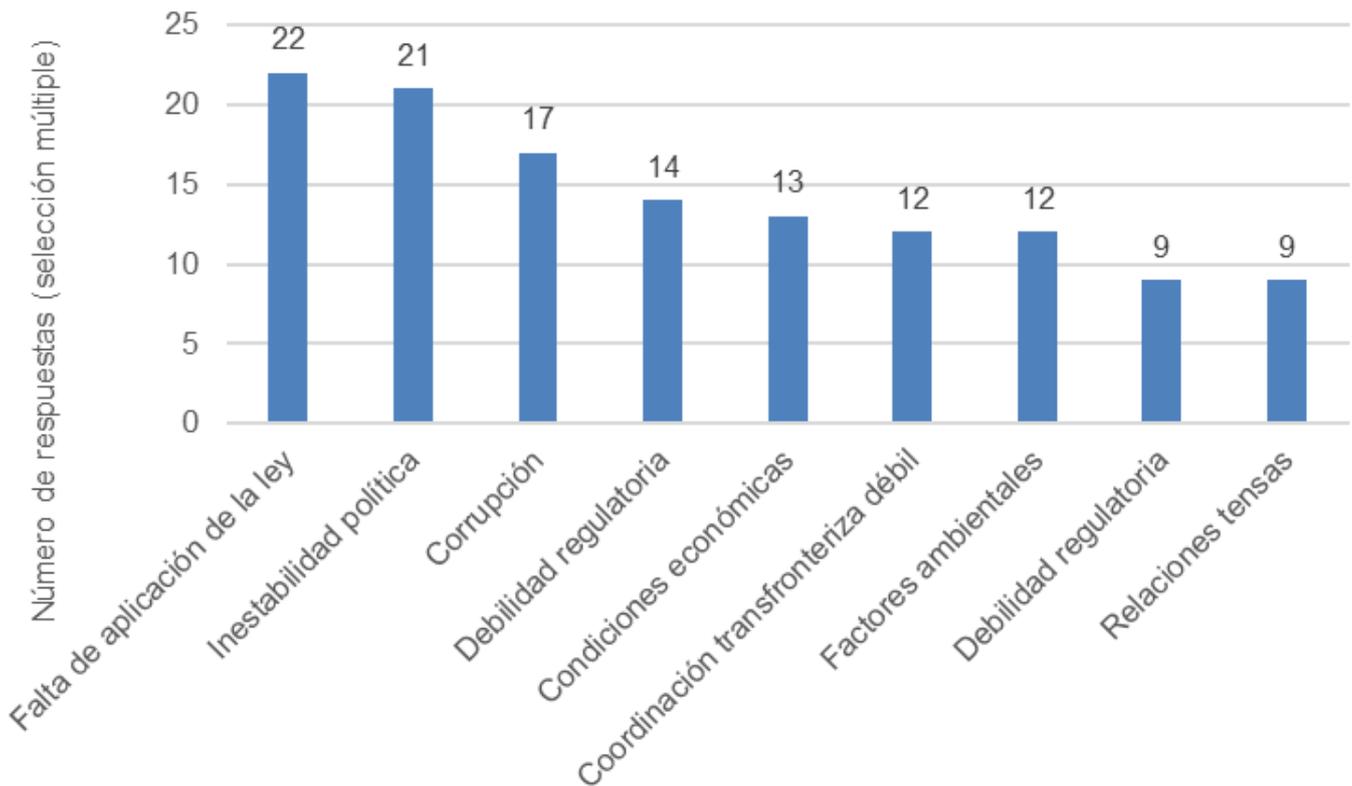


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

En Colombia, los encuestados identificaron la débil aplicación de la ley (22 menciones) y la inestabilidad política (21 menciones) como los principales factores que impulsan los riesgos, seguidos de cerca por la corrupción (17 menciones). Estos hallazgos subrayan un entorno profundamente marcado por instituciones estatales frágiles, volatilidad en la gobernanza y una disminución en la confianza pública. En contraste, los encuestados en Brasil enfatizaron factores estructurales,

como las deficiencias regulatorias, especialmente en la gobernanza de la tierra y la degradación ambiental, lo que indica riesgos asociados a vacíos regulatorios y vulnerabilidades ecológicas. Esta divergencia refuerza observaciones anteriores: mientras que el entorno de riesgos en Brasil es predominantemente ambiental y regulatorio, las amenazas en Colombia emergen directamente de una mayor inseguridad política, el deterioro institucional y una criminalidad generalizada.

**Figura 18.** ¿Cuáles son los principales factores que impulsan estos riesgos? (n=129)

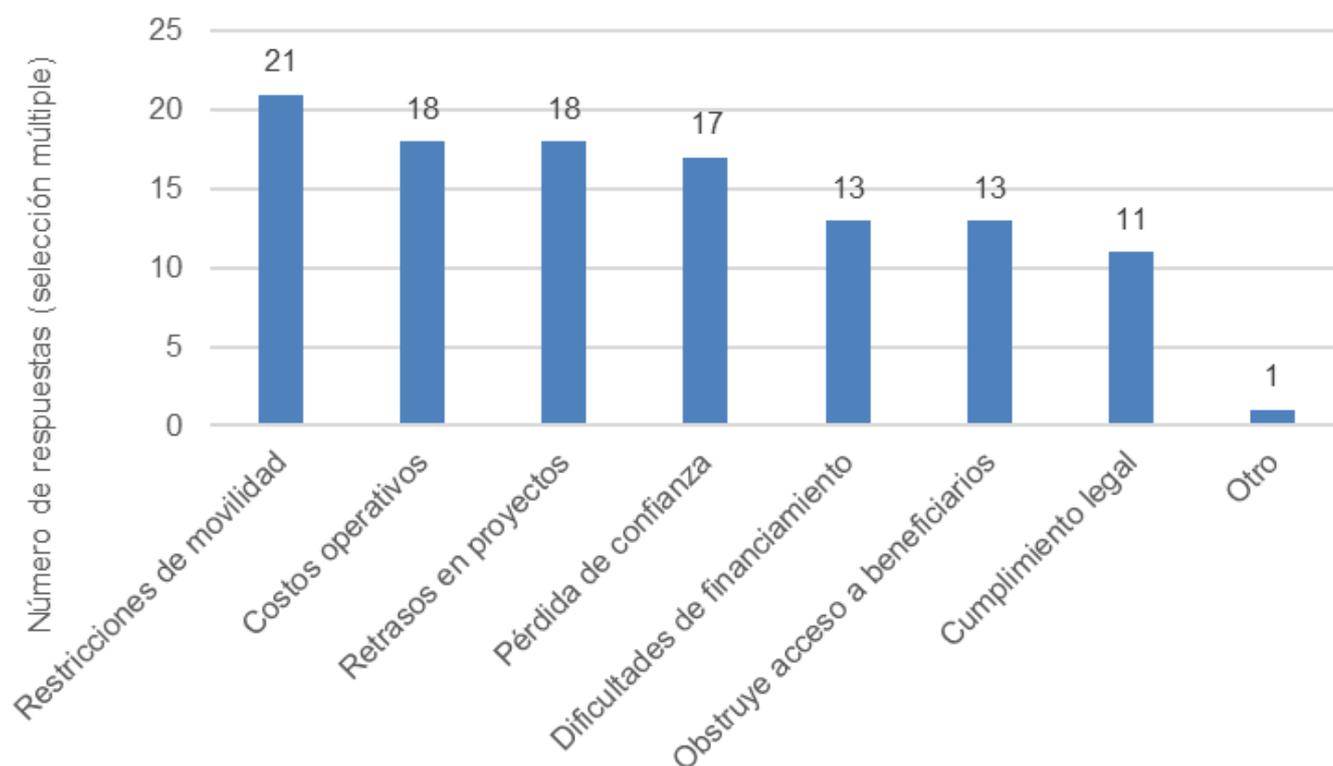


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

En Colombia, la consecuencia más frecuentemente reportada de los riesgos territoriales es la movilidad restringida, mencionada por 21 encuestados. Esto pone de relieve las persistentes barreras logísticas y de seguridad que limitan el desplazamiento de personal, bienes y servicios, muchas de las cuales tienen raíces en dinámicas no resueltas del conflicto armado. Otros impactos destacados incluyen el aumento de los costos operativos y los retrasos en los proyectos (18 menciones cada uno), junto con una disminución en la confianza de los inversionistas (17) y dificultades en el acceso a financiamiento

(13), lo que refleja el efecto acumulado de la inseguridad y la débil infraestructura sobre la viabilidad financiera y la implementación de iniciativas. En comparación, en Brasil, los retrasos en la ejecución de proyectos y programas fueron la consecuencia más citada, apuntando más hacia interrupciones estructurales y ambientales que a restricciones territoriales directas. Este contraste destaca hasta qué punto los desafíos operativos en Colombia están determinados por una inseguridad persistente y un acceso territorial disputado, lo que hace que el trabajo diario en la Amazonía sea más precario y expuesto al riesgo que en Brasil.

**Figura 19.** ¿Cómo impactan estos riesgos las actividades de su organización? (n=112)

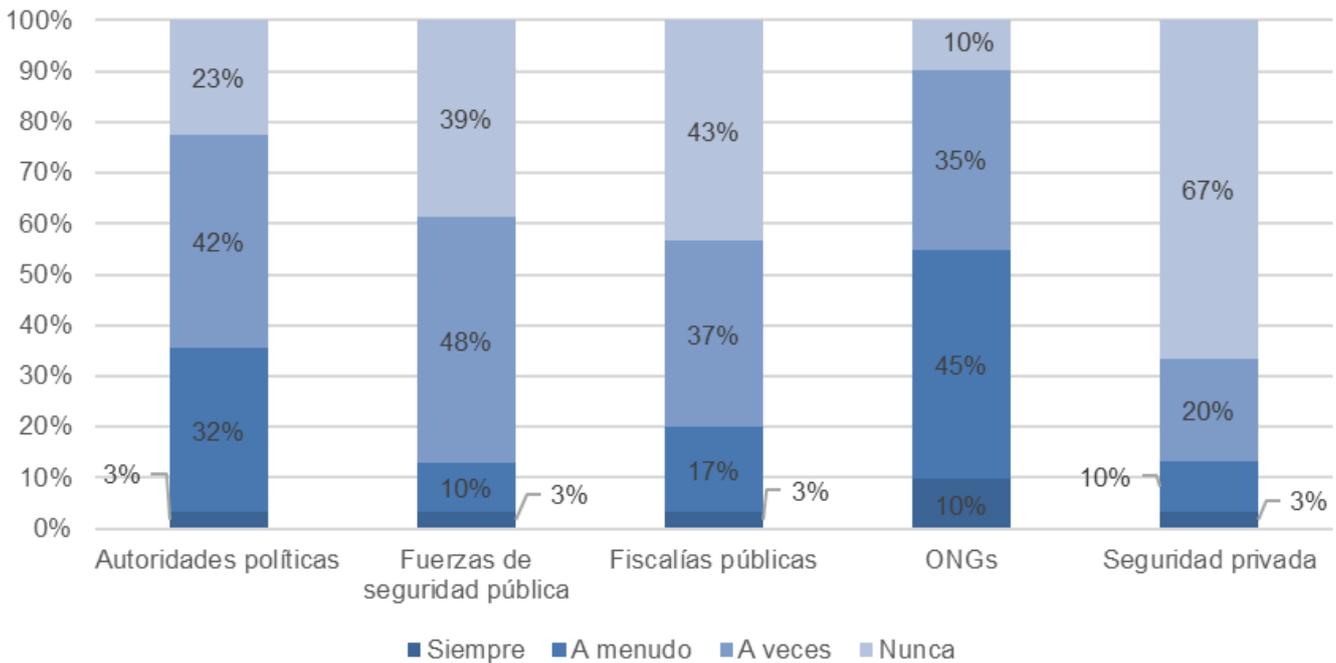


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

En Colombia, las ONGs son los actores con los que se colabora con mayor frecuencia en los esfuerzos para enfrentar los desafíos de seguridad. Solo el 10% de los encuestados reportó “nunca” colaborar, mientras que un 55% indicó hacerlo “a veces” o “siempre”, lo que refleja una fuerte dependencia de redes comunitarias y mecanismos de apoyo mutuo. En contraste, la colaboración con las fuerzas públicas de seguridad sigue siendo limitada: un 39% mencionó “nunca” y apenas un 3% “siempre”, lo que pone de manifiesto una brecha persistente en la coordinación estatal en materia de seguridad. Las autoridades políticas participan de forma más esporádica,

con un 42% indicando colaboración ocasional, mientras que las interacciones con fiscales varían, probablemente debido a disparidades regionales o contextos específicos. Surge una divergencia notable con respecto a Brasil en el papel de la seguridad privada: en Colombia, un 10% de los encuestados declaró colaborar “a menudo” con empresas de seguridad privada, frente al 5% en Brasil, donde casi el 80% afirmó no tener ningún tipo de colaboración. Esto sugiere que, en Colombia, los actores de la seguridad privada desempeñan un papel más central en la gestión de amenazas territoriales complejas, a menudo supliendo la ausencia o debilidad de la capacidad estatal.

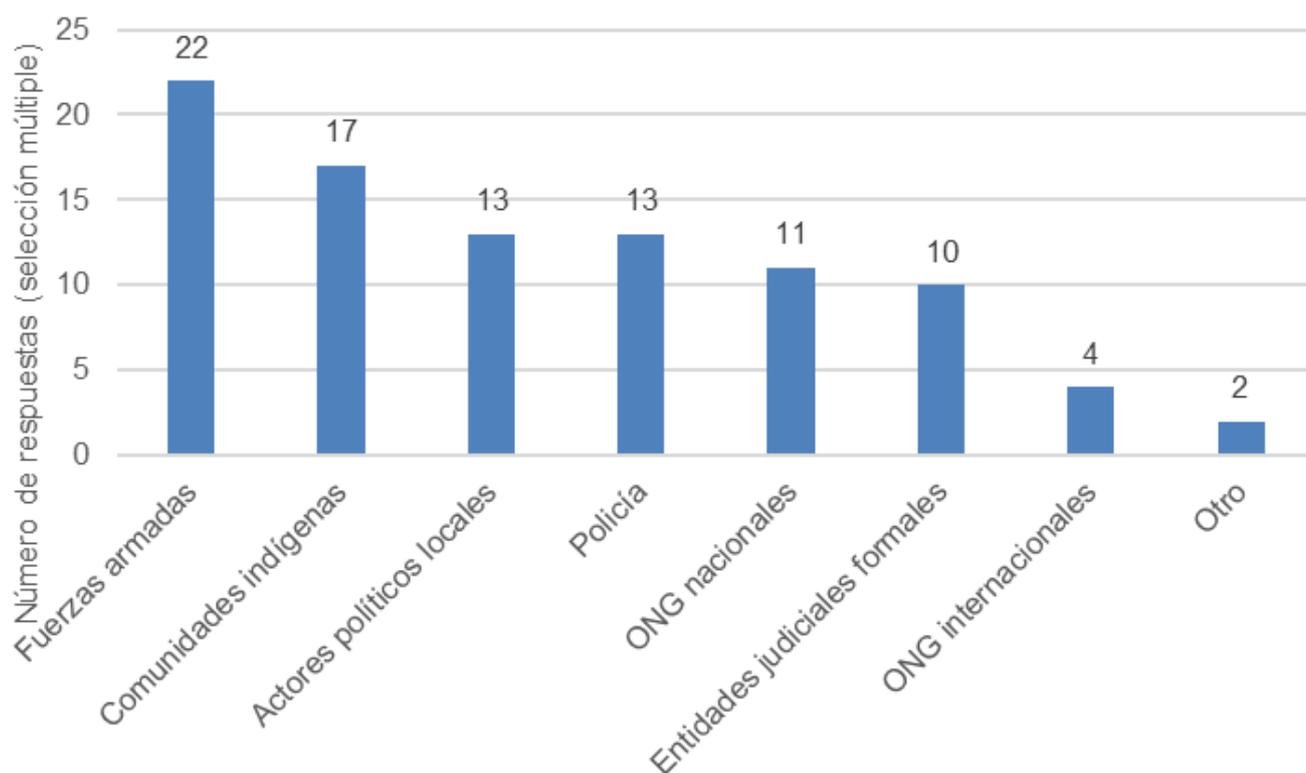
**Figura 20.** ¿Con qué frecuencia colabora su organización con los siguientes actores para abordar desafíos de seguridad? (n=31)



Cuando se les preguntó cuáles son los actores más importantes para promover la seguridad y el estado de derecho, los encuestados en Colombia citaron con mayor frecuencia a las fuerzas militares (22 menciones), seguidas por las organizaciones indígenas y comunitarias (17), así como por las autoridades políticas locales y la policía (13 cada una). También se mencionaron con frecuencia a las ONG nacionales (11), mientras que fiscales y jueces recibieron ligeramente menos menciones (10). Las ONG internacionales fueron vistas como menos influyentes (4 menciones), y unos pocos encuestados señalaron a otros actores (2).

Esto contrasta claramente con el caso de Brasil, donde las instituciones políticas y judiciales son consideradas las principales fuerzas que configuran los resultados en materia de seguridad. Las respuestas en Colombia revelan una dinámica distinta: si bien la colaboración con ONG y actores de seguridad privada es relativamente común, la influencia real se atribuye más a actores comunitarios e híbridos, particularmente en territorios donde la presencia estatal sigue siendo débil o fragmentada. La prominencia de actores no estatales y militares refleja el legado persistente del conflicto armado y la consolidación desigual de la autoridad estatal en la frontera amazónica de Colombia.

**Figura 21.** Seleccione los tres actores más importantes para promover la seguridad y el estado de derecho en las áreas donde opera su organización (n=92).

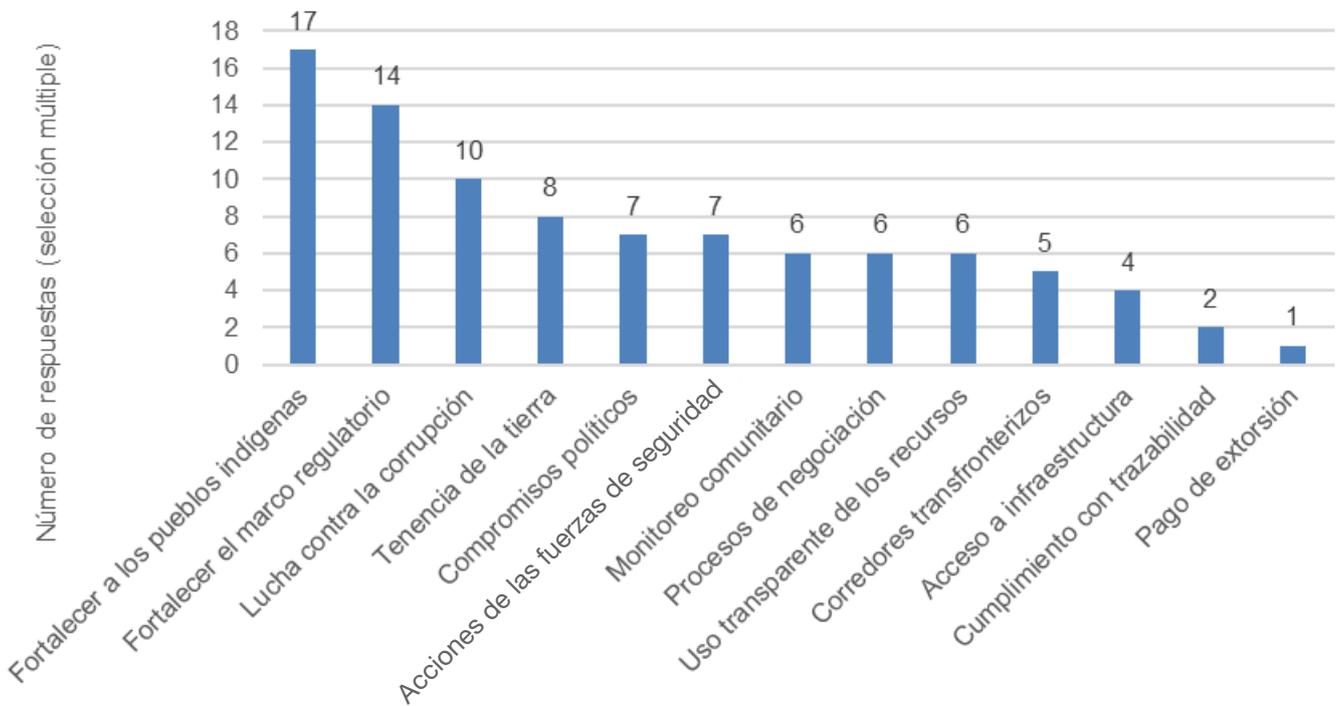


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

Los encuestados colombianos también señalaron como acciones más eficaces para mitigar los riesgos de seguridad el fortalecimiento de comunidades indígenas y locales (11 menciones), el refuerzo de marcos regulatorios (8) y los esfuerzos anticorrupción (7). Le siguen de cerca la regularización de la tenencia de la tierra y los compromisos políticos, con seis menciones cada uno. Estas prioridades reflejan una clara preferencia por enfoques institucionales y basados en

derechos, en lugar de medidas coercitivas o extralegales: solo tres personas hicieron referencia a negociaciones con actores armados, y ninguna respaldó el pago de extorsiones. Al igual que en Brasil, existe un entendimiento compartido de que la seguridad a largo plazo en la Amazonía no depende del control militarizado, sino de una gobernanza inclusiva, del reconocimiento de los derechos territoriales y de la resiliencia de las comunidades locales.

**Figura 22.** Seleccione las 3 acciones más eficaces para mitigar los riesgos de seguridad que podrían afectar las actividades de su organización (n=93).

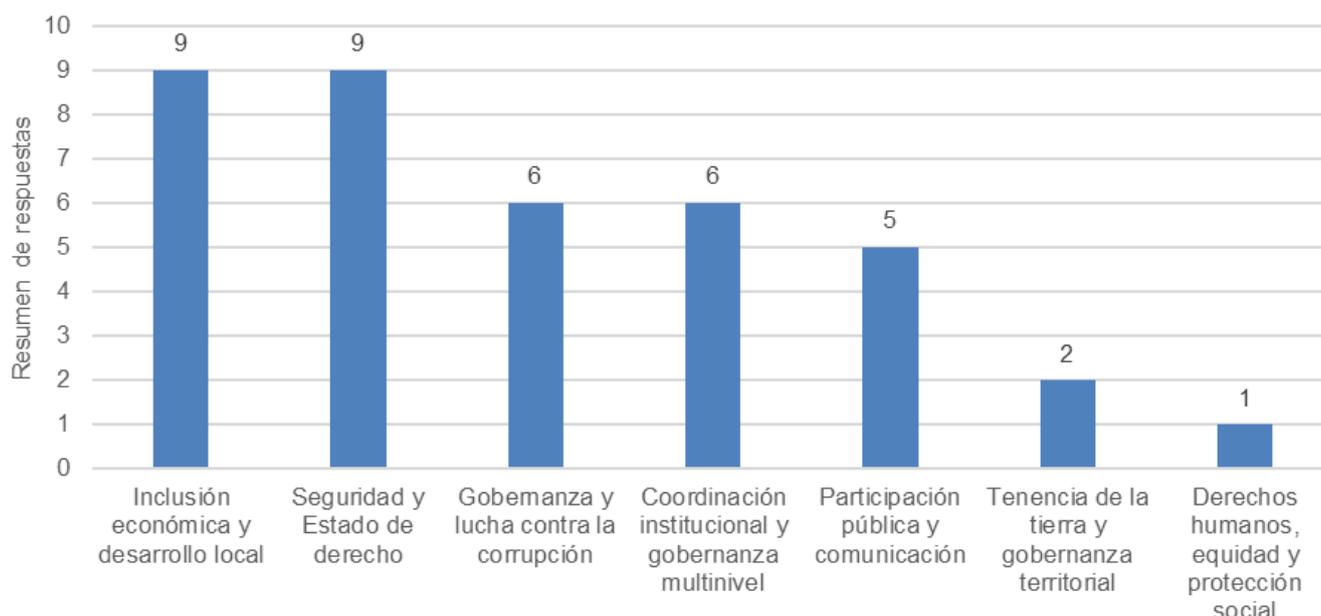


Nota: A los encuestados se les permitió seleccionar una o más opciones.

En Colombia, los encuestados que respondieron con recomendaciones abiertas priorizaron el desarrollo inclusivo, la inversión local y una mayor presencia institucional como estrategias fundamentales para reducir la inseguridad en los territorios amazónicos. La recomendación más mencionada se centró en la inclusión económica y el desarrollo local, con llamados reiterados a mejorar la infraestructura, la educación, la salud y las oportunidades de sustento sostenible, con el fin de fortalecer la resiliencia comunitaria a

largo plazo. Le siguieron de cerca propuestas relacionadas con la participación pública y la comunicación, destacando la necesidad de fortalecer el liderazgo indígena y comunitario como pieza clave para estabilizar áreas afectadas por el conflicto. Aunque fue menos mencionada, una persona subrayó explícitamente la importancia de implementar plenamente el acuerdo de paz con las Farc de 2016, lo que demuestra su vigencia en la configuración de las dinámicas territoriales en áreas de posconflicto.

**Figura 23.** Si pudiera hacer recomendaciones a las autoridades federales, estatales o locales, ¿podría especificar hasta 3 acciones que ayuden a abordar los factores de inseguridad en las áreas donde opera su organización? Resumen de 38 respuestas clasificadas por áreas temáticas.



El segundo gran conjunto de recomendaciones se centró en la seguridad y el Estado de derecho, incluyendo la necesidad de reforzar las fuerzas de seguridad pública, ampliar el acceso a la justicia y proteger a los defensores ambientales. Aunque la corrupción no dominó las respuestas, sí fue mencionada, especialmente en relación con la gobernanza local y la creciente influencia de actores ilícitos en áreas con débil presencia del Estado. Los encuestados destacaron la importancia de la transparencia, la supervisión institucional y la gobernanza coordinada para restaurar la confianza pública y contener la infiltración criminal. En contraste con Brasil, donde el énfasis recayó en la regularización de la tenencia de la tierra, la fiscalización ambiental y la resolución de conflictos relacionados con los recursos naturales, los encuestados colombianos dieron mayor peso a la reforma de la gobernanza, la legitimidad y la inversión social, resaltando la necesidad de reconstruir la confianza entre las comunidades y el Estado mediante una prestación de servicios inclusiva y una gobernanza participativa.

## Comparación entre Brasil y Colombia

A pesar de compartir muchos riesgos de seguridad, Brasil y Colombia exhiben dinámicas institucionales y territoriales distintas. En Brasil, muchas amenazas están vinculadas a factores estructurales: débil aplicación de la ley, degradación ambiental y captura de instituciones locales. Los actores estatales, en particular los gobiernos locales y las autoridades judiciales, son percibidos como centrales para mejorar la gobernanza y fortalecer la seguridad, lo que indica mayores expectativas hacia el liderazgo estatal formal.

En cambio, en Colombia los riesgos están más directamente asociados con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, los grupos armados y la fragilidad institucional. Allí, los líderes comunitarios, las organizaciones indígenas y las fuerzas militares son considerados más influyentes que las autoridades civiles, lo que evidencia un panorama de gobernanza marcado por la informalidad, la violencia y el legado del conflicto armado.

Estos contrastes también se evidencian en la forma en que las organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro responden a los desafíos de seguridad y regulación. En Brasil, gran parte del enfoque se centra en reformas estructurales e institucionales, incluidas regulaciones ambientales más estrictas, la regularización de tierras y el fortalecimiento de las comunidades a largo plazo. Si bien muchos encuestados colombianos comparten preocupaciones similares, su énfasis se dirige más hacia la estabilización de los territorios vulnerables mediante inversiones sociales y económicas, la ampliación de la implementación del acuerdo de paz y la reconstrucción de la confianza en las instituciones estatales. En términos simples, los encuestados brasileños se concentran en fortalecer las capacidades existentes, mientras que sus contrapartes colombianas afirman enfrentar déficits más profundos en presencia estatal y legitimidad. A pesar de estas diferencias, los encuestados en ambos países rechazan las estrategias extralegales y destacan la importancia de una gobernanza local inclusiva y comunidades resilientes como pilares para garantizar una seguridad duradera en la Amazonía.

## Sección V. Implicaciones de las políticas públicas en Brasil y Colombia

Las siguientes implicaciones para políticas públicas de alto nivel muestran las experiencias y percepciones de quienes trabajan en la primera línea de la Amazonía — investigadores, emprendedores locales, líderes comunitarios y funcionarios — navegando en uno de los entornos más complejos y disputados del mundo. Algunas recomendaciones son más convencionales que otras, pero ninguna es abstracta: todas representan prioridades concretas planteadas por actores que operan cotidianamente en territorios marcados por vacíos legales, desafíos ambientales y disputas violentas por la tierra y los recursos. Esta lista está dirigida no solo a gobiernos nacionales y subnacionales, sino también a inversionistas de impacto, donantes internacionales y, sobre todo, a las organizaciones comunitarias que arriesgan su seguridad y su futuro para defender la Amazonía.

- **Reforzar la gobernanza territorial y la presencia institucional:** Tanto en Brasil como en Colombia es urgente fortalecer la presencia del Estado y mejorar las capacidades judiciales y de aplicación de la ley. En Brasil, a pesar de contar con una legislación ambiental sólida a nivel municipal, estatal y federal, la implementación sigue siendo débil. La Policía Federal ha reportado brechas logísticas y operativas significativas, incluyendo transporte inadecuado y capacidad limitada de fiscalización fuera de los principales centros urbanos. Como destacó un fiscal brasileño, la regulación funciona de forma desigual, creando gradientes de gobernanza que van desde una regulación urbana efectiva

hasta una supervisión casi inexistente en áreas rurales. Colombia enfrenta déficits similares en materia de aplicación de la ley, agravados por facciones criminales que han establecido estructuras de gobernanza paralela, socavando la autoridad estatal. Los encuestados de ambos países subrayan que el fortalecimiento de las instituciones y su legitimidad es fundamental para recuperar el control territorial y restablecer la gobernanza legítima.

- **Reforzar las capacidades de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y locales:** Las respuestas de las encuestas en ambos países destacan con fuerza el papel fundamental de las comunidades indígenas y locales en la promoción de la seguridad territorial. En Brasil, los actores subrayan la importancia de una gobernanza participativa, citando marcos legales como el Estatuto de los Pueblos Indígenas. En Colombia, los encuestados señalaron el éxito de las reservas indígenas (resguardos indígenas) y de los Planes de Gestión Ambiental Territorial (PGAT) impulsados por las comunidades, apoyados por entidades como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) y la Fundación Gaia Amazonas. El empoderamiento de estos grupos, mediante el reconocimiento formal de derechos y estructuras de gobernanza inclusivas, ha demostrado ser esencial para reducir la vulnerabilidad frente a amenazas externas y frenar actividades ilegales.
- **Promover el desarrollo económico inclusivo para abordar los factores estructurales:** La precariedad económica surgió como un factor determinante de la inseguridad tanto en Brasil como en Colombia. Los encuestados brasileños señalaron la infraestructura inadecuada, la limitada cobertura de internet y la falta de servicios públicos esenciales, que favorecen de forma desproporcionada a los grandes proyectos de agronegocio

e hidroeléctricos, en detrimento de la agricultura familiar local. En Colombia, los encuestados mencionaron condiciones similares, como caminos en mal estado y conectividad deficiente, que agravan el aislamiento económico y fomentan la dependencia de economías ilícitas. En ambos países, se hizo un llamado a realizar inversiones estratégicas en medios de vida sostenibles, educación, salud e infraestructura, con especial atención a cooperativas, pequeños productores e iniciativas lideradas por mujeres, con el fin de mitigar vulnerabilidades económicas y fortalecer la resiliencia local.

- **Fortalecer la gobernanza ambiental y la aplicación de la regulación:** Los encuestados brasileños identificaron de forma reiterada los riesgos ambientales, en particular la deforestación ilegal y la extracción ilícita de recursos naturales, como amenazas centrales para la seguridad territorial. Aunque Brasil cuenta con un marco legal amplio, las fallas sistémicas en su implementación, la corrupción y las limitaciones logísticas (como la falta de recursos para patrullajes) socavan gravemente la protección ambiental.<sup>35</sup> En Colombia, si bien los riesgos ambientales también fueron reconocidos, los encuestados manifestaron una preocupación más inmediata por las amenazas criminales generalizadas, destacando la necesidad de que la gobernanza ambiental se integre con las operaciones de seguridad, especialmente para combatir las economías ilegales como la minería y tala ilícitas.
- **Abordar la corrupción y mejorar la transparencia institucional:** La corrupción fue señalada de manera consistente por actores de ambos países como un obstáculo crítico para la gobernanza territorial efectiva. Los encuestados brasileños destacaron el tráfico de influencias, los procesos opacos de licenciamiento y el sabotaje deliberado

de la regulación por parte de actores políticos. En Colombia, se reportaron problemas similares, incluyendo cooptación institucional por parte de élites locales. En ambos contextos, los actores consultados abogaron por mayor transparencia, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y un fortalecimiento de los sistemas de control para frenar la captura de poder y la corrupción.

- **Fortalecer la colaboración entre las comunidades y el Estado:** Las entrevistas a informantes clave y los resultados de la encuesta revelan dinámicas nacionales distintas en lo que respecta a la participación de actores. En Brasil, los actores consultados dieron prioridad a las instituciones formales, como autoridades políticas locales, jueces y fiscales, destacando la necesidad de reforzar estas relaciones institucionales. En Colombia, en cambio, se enfatizó el papel fundamental de actores de gobernanza informales, comunitarios e híbridos, como organizaciones indígenas, ONGs e incluso empresas privadas de seguridad, lo cual refleja patrones históricos de débil consolidación estatal y el legado persistente de una gobernanza fragmentada por el conflicto armado.
- **Aclarar y asegurar la tenencia de la tierra:** La inseguridad sobre la tenencia de la tierra sigue siendo un factor clave de conflicto en ambos países. En Brasil, los encuestados en entrevistas y encuestas subrayaron la urgencia de acelerar los procesos de regularización fundiaria, ya que las superposiciones de títulos y la falta de seguridad jurídica alimentan conflictos agrarios, acaparamiento de tierras y prácticas ambientales ilícitas. La complejidad del sistema registral brasileño agrava aún más estas vulnerabilidades.<sup>36</sup> Por su parte, los encuestados colombianos también destacaron la importancia de la seguridad en la tenencia, con un enfoque más centrado en la estabilización de

disputas territoriales derivadas del conflicto armado, así como en el fortalecimiento de estructuras de gobernanza comunitaria, señalando como prioridad la implementación de herramientas como el Catastro Multipropósito.

- **Ampliar y proteger a la sociedad civil y a los defensores ambientales:**

Tanto los encuestados brasileños como los colombianos destacaron la vulnerabilidad de los actores de la sociedad civil y de los defensores medioambientales. En Brasil, las amenazas incluyen violencia física y un creciente “linchamiento virtual” en redes sociales. En Colombia, los encuestados informaron sobre violencia selectiva por parte de grupos armados ilegales como un riesgo especialmente grave. Los responsables de políticas públicas en ambos países deben implementar urgentemente mecanismos de protección específicos y fortalecer los marcos jurídicos existentes para salvaguardar a quienes actúan en entornos de alto riesgo.<sup>37</sup>

- **Fortalecer las capacidades de monitoreo e inteligencia:**

Los encuestados brasileños subrayaron la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para el monitoreo de riesgos ambientales y criminales orientado en inteligencia, destacando deficiencias como el apoyo logístico insuficiente y la escasa coordinación interinstitucional. En Colombia, los actores también abogaron por mejorar los esfuerzos de inteligencia y monitoreo, pero haciendo hincapié en la necesidad de desarticular las redes criminales organizadas profundamente arraigadas en la gobernanza y en las economías locales, particularmente en la tala ilegal, la minería ilícita y el narcotráfico.

- **Implementar y respaldar los acuerdos internacionales y de paz:**

Los actores brasileños frecuentemente defendieron la ratificación e implementación de compromisos ambientales internacionales, como la Declaración de Belém, para fortalecer la gobernanza ambiental. En Colombia, los encuestados continúan destacando la necesidad de soluciones negociadas al conflicto armado y la desmovilización de grupos ilegales (incluyendo los ligados al Acuerdo de Paz de 2016), señalando que las facciones armadas siguen explotando la inseguridad territorial y los vacíos de gobernanza. Esta divergencia pone de relieve cómo las trayectorias históricas moldean las prioridades nacionales: Brasil con un enfoque en la sostenibilidad ecológica, y Colombia con énfasis en la consolidación de la paz y la estabilización institucional.

- **Mobilizar los liderazgos políticos a través de compromisos regionales y nacionales:**

Los compromisos políticos de alto nivel, desde lo regional hasta lo nacional y subnacional, son fundamentales para sentar las bases de un compromiso más profundo frente a los riesgos territoriales y regulatorios. Declaraciones como la Declaración de Belém de 2023, que facultó a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para asumir desafíos relacionados con el estado de derecho, y el Plan Amazónico de Seguridad y Soberanía (AMAS) de Brasil (2024) ilustran el creciente reconocimiento de que las agendas de economía verde deben estar ancladas en la estabilidad legal e institucional.<sup>38</sup> En Colombia, la estrategia *Visión Amazonía* ejemplifica cómo los objetivos de reducción de la deforestación pueden vincularse a mecanismos de financiación internacional bajo marcos como la Declaración Conjunta de Intención.<sup>39</sup> Sin embargo, estos planes deben estar respaldados por financiamiento, coordinación intersectorial y voluntad política.

- **Integrar monitoreo comunitario e innovación tecnológica:** El monitoreo ambiental liderado por comunidades, utilizando GPS, drones y plataformas móviles de datos, ha ganado terreno como una herramienta clave para la defensa territorial. En Colombia, por ejemplo, la Mesa Institucional de Monitoreo Comunitario, coordinada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), articula los datos recolectados por las comunidades con los sistemas ambientales nacionales. ONG como Amazon Conservation Team (ACT) y Fundación Gaia Amazonas han capacitado a comunidades indígenas en cartografía digital y monitoreo ecológico. Estas iniciativas no solo mejoran la vigilancia en tiempo real, sino que también refuerzan la autonomía comunitaria, la gobernanza local y la legitimidad territorial en áreas donde la supervisión formal es débil o inexistente.
- **Reconocer y abordar los posibles arreglos de gobernanza informal e híbrida:** Las entrevistas realizadas en Brasil y Colombia revelaron la presencia generalizada de sistemas de gobernanza híbridos, donde la autoridad estatal se superpone — y a veces compite — con instituciones informales, normas comunitarias y controles ejercidos por actores criminales. En Brasil, iniciativas como los Territorios de Uso Colectivo (TUCs) y los mecanismos participativos de resolución de conflictos representan modelos innovadores que combinan la regulación formal con la supervisión comunitaria. Desde una perspectiva de corto plazo, involucrarse con estos actores puede parecer una estrategia pragmática, que ofrece beneficios inmediatos o facilita las operaciones. Sin embargo, los riesgos a largo plazo para inversores son significativos: tal compromiso podría legitimar estructuras ilegales de manera inadvertida, lo que conduciría a una mayor inestabilidad, problemas legales y daños reputacionales.
- **Analizar y abordar el rol de los grupos armados y las negociaciones informales en la gobernanza:** En Colombia, aunque implican riesgos reputacionales y responsabilidades legales, las negociaciones informales con grupos armados siguen siendo una realidad en muchas regiones. Algunas comunidades notifican a estos actores antes de implementar proyectos, mientras que facciones como el Estado Mayor Central (EMC)<sup>40</sup> han impuesto controles ambientales en áreas sin presencia estatal. En 2023, se reportó una reducción de más del 50% en la deforestación en algunos territorios bajo control del EMC. Aunque controvertida, esta dinámica refleja un vacío de gobernanza y exige estrategias creativas y basadas en derechos para transitar desde formas de gobernanza criminal de facto hacia una autoridad pública legítima — especialmente en áreas donde el proceso de reintegración ha fallado desde el Acuerdo de Paz de 2016.
- **Nunca normalizar la extorsión ni las economías coercitivas:** La extorsión — conocida como *vacunas* en español y *caixinhas* en portugués — se ha convertido en un “costo operativo” arraigado para muchos actores en la Amazonía brasileña y colombiana. Si bien estos pagos pueden garantizar la continuidad de las operaciones en el corto plazo, en última instancia alimentan economías criminales, comprometen los estándares éticos y socavan la gobernanza y la seguridad a largo plazo. Los responsables de políticas públicas, donantes e inversionistas deben reconocer estas realidades y diseñar intervenciones contextualizadas que protejan a las comunidades sin reforzar los flujos financieros coercitivos ni legitimar estructuras de poder ilegales.
- **Incentivar estrategias de inversión adaptativas y con tolerancia al riesgo:** Las filantropías y los inversionistas de impacto deben adoptar enfoques

conscientes del riesgo y basados en evidencia que reconozcan la complejidad operativa de la Amazonía. Existe un amplio consenso entre los actores locales de que no hay una “solución mágica”; por el contrario, se deben abordar múltiples riesgos estructurales e inmediatos de forma simultánea. Los inversionistas deberían incorporar registros de riesgos territoriales, condicionar los desembolsos a evaluaciones de línea base, y co-diseñar estrategias de mitigación junto con actores locales. La capacidad de trabajar “con la realidad tal como es”, incluso apoyando modelos híbridos y gobernanza participativa, es fundamental para que las inversiones sean éticas, eficaces y sostenibles.

- **Promover la concientización sobre riesgos y el fortalecimiento de capacidades entre inversionistas de impacto y desarrolladores de proyectos:** Los inversionistas de impacto deben ir más allá de la debida diligencia financiera tradicional para evaluar y gestionar sistemáticamente los riesgos territoriales y regulatorios. Esto comienza con evaluaciones de línea base periódicas que identifiquen los principales factores de riesgo, vulnerabilidades y estrategias de mitigación, que evalúen tanto las consecuencias previstas como las no intencionadas de operar en regiones disputadas o inseguras. Las inversiones pertinentes deberían incluir registros estandarizados de riesgos territoriales como parte de sus protocolos de debida diligencia. En paralelo, los inversionistas y desarrolladores de proyectos deberían participar en formaciones especializadas — presenciales o virtuales — que profundicen su comprensión de las dinámicas locales y refuercen su deber de cuidado hacia las comunidades afectadas. Con el respaldo de organizaciones como la Amazon Investor Coalition, el Instituto Igarapé y el Banco Interamericano de Desarrollo, estas capacitaciones podrían complementarse con esfuerzos de incidencia estratégica que promuevan el compromiso con instituciones públicas y actores locales, impulsando reformas políticas y fortaleciendo las salvaguardas regulatorias esenciales para una inversión sostenible y sensible al conflicto.

# Anexo: Ejemplos de medidas para mitigar los riesgos territoriales y regulatorios

Medidas	Ejemplos de Colombia	Ejemplos de Brasil
<b>Promover compromisos políticos regionales, nacionales y subnacionales</b>	La Declaración de Belém (2023) faculta a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para adoptar un enfoque más firme en el abordaje de las preocupaciones relacionadas con el Estado de derecho.	
<b>Fortalecer los marcos regulatorios e instituciones para proteger el medio ambiente</b>	El Plan Integral de Contención a la Deforestación (PICD), parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, busca reducir la deforestación en un 20% mediante economías forestales comunitarias, ordenamiento territorial, aplicación penal y conservación de la biodiversidad, enfrentando desafíos de actores ilegales y grupos armados que socavan los esfuerzos ambientales.	El Programa de Modernización del Licenciamiento Ambiental integra sistemas digitales y capacitaciones en los municipios, reduciendo los tiempos de análisis y aumentando la detección de irregularidades.
<b>Fortalecer el régimen de tenencia de la tierra para garantizar transparencia y rendición de cuentas</b>	El Catastro Multipropósito es una iniciativa para crear un sistema catastral integrado, actualizado e interoperable que abarque información física, jurídica y económica de los predios rurales y urbanos. A comienzos de 2025, aproximadamente el 26,8% del territorio nacional había sido actualizado en este sistema, con una meta del 50% para finales del año.	El Programa de Regularización Fundiaria Digital de Pará integra mapeo georreferenciado, registro público de títulos y cámaras comunitarias de mediación.
<b>Aplicar protecciones ambientales</b>	El Consejo Nacional para la Lucha contra la Deforestación y Otros Delitos Ambientales (Conaldef), creado en 2019, coordina estrategias interinstitucionales para combatir la deforestación, particularmente en áreas críticas.	El grupo de trabajo Integrado de Protección Ambiental combina monitoreo satelital y equipos interinstitucionales.

Medidas	Ejemplos de Colombia	Ejemplos de Brasil
<b>Reforzar el Estado de derecho y medidas anticorrupción</b>	Territorios Forestales Sostenibles (Tefos), un programa emblemático del International Climate Finance (ICF) de la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo (FCDO), tiene como objetivo estabilizar las fronteras de deforestación en áreas rurales de Colombia afectadas por conflictos, mediante el fortalecimiento del sistema de justicia penal para combatir de manera más eficaz los delitos ambientales en puntos críticos de deforestación.	El Sistema Integrado de Transparencia en el Licenciamiento Ambiental digitaliza los procesos municipales y realiza verificaciones automatizadas.
<b>Mejorar la infraestructura y la accesibilidad</b>	La introducción de servicios de internet satelital como Starlink, que proporciona internet de alta velocidad en áreas remotas, ofrece una solución prometedora para cerrar las brechas de conectividad en la Amazonía, siempre que se cuente con mecanismos eficaces de seguimiento y vigilancia para prevenir usos indebidos y garantizar beneficios equitativos.	El Programa de Conectividad Amazónica implementa redes de internet satelital y rutas logísticas en 30 comunidades aisladas.
<b>Trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales</b>	El Acuerdo Cero Deforestación en los sectores ganadero y lácteo, establecido en mayo de 2019, es una iniciativa público-privada orientada a eliminar la deforestación y la transformación de los <i>páramos</i> <sup>41</sup> en estas cadenas de suministro para el año 2025.	El Sistema de Trazabilidad de la Amazonía utiliza tecnología blockchain y monitoreo satelital para certificar a 10.000 productores de açaí.
<b>Creación de corredores transfronterizos de áreas protegidas</b>	La Alianza Corredor Triple A (Andes-Amazonas-Atlántico), impulsada por la colaboración entre Gaia Amazonas, comunidades indígenas colombianas y diversas ONG, destaca el papel de los actores locales en los esfuerzos de conservación transfronteriza.	Este punto no surgió en las entrevistas realizadas en Brasil.

continuación

Medidas	Ejemplos de Colombia	Ejemplos de Brasil
<b>Monitoreo de dinámicas ambientales</b>	El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) monitorea los conflictos ambientales vinculados a proyectos de infraestructura, industrias extractivas y expansión agrícola.	El Sistema de Alerta Climática de Acre combina datos meteorológicos y redes comunitarias para prevenir eventos extremos, reduciendo las pérdidas agrícolas y protegiendo a las comunidades vulnerables.
<b>Uso transparente de los recursos de proyectos e inversiones locales</b>	La plataforma Global Forest Watch del WRI ofrece datos de libre acceso y herramientas de monitoreo en tiempo real para rastrear la deforestación, ayudando a garantizar que los recursos asignados a proyectos de conservación se utilicen de manera eficaz.	El Portal de Transparencia de Fondos Ambientales publica datos en tiempo real sobre recursos y decisiones, aumentando la participación comunitaria en la gestión de inversiones locales.
<b>Empoderar a las comunidades indígenas y locales.</b>	ONG como Amazon Conservation Team (ACT) y la Fundación Gaia Amazonas trabajan estrechamente con grupos indígenas para apoyar la cartografía de tierras, la preservación cultural y el desarrollo de estructuras sólidas de gobernanza.	El Programa de Capacitación en Gestión Territorial combina conocimientos tradicionales y técnicos, permitiendo que comunidades indígenas y quilombolas gestionen directamente sus proyectos sostenibles.
<b>Monitoreo comunitario de recursos</b>	La Mesa Institucional de Monitoreo Comunitario, liderada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), promueve la colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones comunitarias, facilitando la incorporación de datos recopilados localmente en los sistemas nacionales de monitoreo ambiental.	La Red de Vigilancia Territorial Indígena combina conocimientos tradicionales y tecnología digital para monitorear y proteger los territorios, reduciendo las invasiones ilegales.

Medidas	Ejemplos de Colombia	Ejemplos de Brasil
<p><b>Procesos de negociación con grupos armados</b></p>	<p>En 2023, el Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las Farc, implementó un alto al fuego temporal e impuso restricciones a la tala en Caquetá y Guaviare, lo que llevó a una reducción del 51% en la deforestación en estas regiones. Sin embargo, cuando las negociaciones de paz se estancaron en 2024, el EMC levantó estas restricciones, permitiendo la reanudación de la deforestación, a menudo a cambio de pagos por extorsión, reforzando así su control sobre el territorio.</p>	<p>Esta cuestión no surgió en las entrevistas realizadas en Brasil.</p>
<p><b>El pago de extorsiones</b></p>	<p>Si bien los pagos ilegales a grupos armados que controlan territorios pueden ofrecer beneficios económicos a corto plazo, representan un alto riesgo para los inversionistas, ya que consolidan actividades ilegales y amenazan tanto el cumplimiento legal como la sostenibilidad a largo plazo.</p>	<p>Esta cuestión no fue abordada directamente en las entrevistas realizadas en Brasil.</p>

# Notas finales

1. Instituto Igarapé (2022). Artículo Estratégico 55. [O ecossistema do crime ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta](#)
2. MapBiomas (2023). [Signs of illegality in deforested areas prevail from north to south of Brazil](#).
3. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). [Deforestación en el bioma amazónico colombiano](#)
4. Panel Científico para la Amazonía – SPA (2021). Capítulo 14: Amazonía en movimiento: cambio de políticas, estrategias de desarrollo, pueblos, paisajes y medios de vida, en [El informe de Evaluación de la Amazonía 2021](#); Garcia, P. y Wong, G. (2024) [The political economy of deforestation in the Colombian Amazon](#), Stockholm University.
5. Nunes, F. et al. (2024). [Lessons from the historical dynamics of environmental law enforcement in the Brazilian Amazon](#), Artículo Científico 14. Amazon Watch (2023). [Amazonian Indigenous Peoples Mobilize Against Railway Mega-project That Threatens Rights and the Rainforest](#)
6. Bebbington, A. et al. (2018). [Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights](#) Sustainability Science 115 (52); Bustos, S., Cheston, T. y Rao, N. (2023). [The missing economic diversity of the Colombian Amazon](#)
7. Brito, B. y Faris, H. (2022). [O Judiciário está punindo desmatadores ilegais na Amazônia? Resultados do programa Amazônia Protege](#)
8. Candino, M., Brandao, A., Munger, J., Rausch, L. y H. Gibbs. (2024). [Protected areas in the Brazilian Amazon threatened by cycles of property registration, cattle ranching and deforestation](#), Land 13 (7); Comité Nacional de los Países Bajos – IUCN (2022), [Drivers of deforestation in the Colombian Amazon: land grabbing](#)
9. Reydon, B., Siqueira, G., Passos, D. y S. Honer (2023). [Unclear land rights and deforestation: pieces of evidence from the Brazilian reality](#), Land 12 (1), y Jones, K., Cabra-Ruiz, N., Sanchez, N., Gonzalez, E., y M. Velez (2024). [Land tenure security and forest cover in the Colombian Amazon](#), Frontiers for Global Change, Volume 7.
10. Panel Científico para la Amazonía – SPA (2021). Capítulo 19: Motores e impactos ecológicos de la deforestación y la degradación forestal, en [El informe de Evaluación de la Amazonía 2021](#); Abdenur, A. Kuele G, y Amorim A. eds. (2019). [Clima y seguridad en América Latina y el Caribe](#), Instituto Igarapé e Instituto Clima e Sociedade; Nguyen, T.T. et.al. (2023). [Security risks from climate change and environmental degradation: implications for sustainable land use transformation in the Global South](#), en [Current Opinion in Environmental Sustainability](#). Vol. 63.
11. Instituto Igarapé (2024). [La Ruta del Dinero: Delitos ambientales e ilícitos económicos en cadenas productivas en la Amazonía brasileña](#), Artículo Estratégico 63.
12. Mueller, B. (2022). [Property rights and violence in indigenous land in Brazil](#), Land Use Policy, Vol. 116; Bisopo, D., Bernardy, R., Jacinto, J. y Oliveira, L. (2024). [Conflitos territoriais e gestão fundiária na Amazônia: desafios e dinâmicas em Rondônia](#), *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18 (10).
13. Waisbich, L., Risso, M., Husek, T. y L. Brasil (2022). [O ecossistema do crime ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta](#), Artículo Estratégico 55; InSight Crime e Instituto Igarapé (2023). [Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía colombiana](#); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e Instituto Igarapé (2024). [A relação entre drogas e crimes na Bacia Amazônica](#)
14. *Quilombola* se refiere a los miembros de comunidades afrobrasileñas, conocidas como *quilombos*, fundadas por descendientes de personas esclavizadas que resistieron a la opresión colonial. Estas comunidades poseen derechos culturales, territoriales y colectivos sobre la tierra, reconocidos por la legislación brasileña.

15. Las entrevistas se llevaron a cabo entre octubre de 2024 y enero de 2025, siguiendo un formato estándar y con una duración de entre 30 y 60 minutos. Fueron realizadas tanto de manera presencial como por teléfono. Se conservaron las transcripciones y todos los datos fueron sistematizados en matrices. Los nombres y ubicaciones de las personas entrevistadas se han reservado para proteger su privacidad y garantizar su seguridad.
16. Confederación Nacional de Municipios - CNM (2022). El [licenciamiento urbanístico en 85% de los municipios no está digitalizado](#); en el norte, la proporción es inferior al 18%.
17. A partir de 2025, los nuevos sistemas satelitales en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) — como Starlink, de SpaceX, y el Proyecto Kuiper, de Amazon — han ampliado significativamente la conectividad a internet en la cuenca amazónica, especialmente en áreas remotas y previamente desconectadas. Estas tecnologías ofrecen acceso a mayor velocidad y con menor latencia en comparación con las opciones satelitales tradicionales, lo que permite una mayor penetración digital para comunidades indígenas, sistemas de monitoreo ambiental y actores de la sociedad civil que operan en primera línea. Aunque la adopción sigue siendo desigual debido a barreras de costo y regulación, estos sistemas comienzan a cerrar brechas digitales críticas, apoyar servicios de telemedicina y educación, y fortalecer el monitoreo ambiental y de seguridad en tiempo real en regiones de difícil acceso.
18. La falta crónica de servicios básicos en la Amazonía, incluidos salud, centros médicos, educación, agua potable y saneamiento, combinada con opciones legales de subsistencia limitadas, empuja a muchas personas hacia actividades de extracción ilícita y depredación como medio de supervivencia. El suministro eléctrico irregular, las carreteras intransitables y la escasez de conexiones aéreas obstaculizan los emprendimientos sostenibles y hacen que la supervisión estatal sea prácticamente imposible.
19. En palabras de un representante indígena: “La demarcación no impide la ilegalidad. El narcotráfico ha avanzado. Aquí, logramos frenar la minería. Las grandes empresas no entran en el territorio. El gran proyecto de carretera que iba a pasar por aquí no prosperó. Pudimos detener eso. Pero lo demás, el narcotráfico, no podemos.”
20. Brasil es el segundo país más letal del mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente, con 25 personas asesinadas en 2023, superado solo por Colombia, que registró 79 homicidios en el mismo año. Global Witness. (2024). [Standing Firm: The Land and Environmental Defenders Report 2023](#)
21. Instituto SINCHI. [División político-administrativa](#)
22. Las entrevistas se realizaron entre octubre de 2024 y enero de 2025, siguiendo un formato estándar y con una duración de entre 30 y 60 minutos. Fueron conducidas tanto de manera presencial como por vía telefónica. Se conservaron las transcripciones y todos los datos fueron sistematizados en matrices. Los nombres y ubicaciones de las personas entrevistadas se han reservado para proteger su privacidad y garantizar su seguridad.
23. Farc se refiere a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero de orientación marxista surgido en 1964. Fundado originalmente como el brazo armado del Partido Comunista Colombiano, mantuvo un conflicto armado contra el Estado durante más de cinco décadas. Tras el acuerdo de paz de 2016, el grupo se desmovilizó formalmente y se transformó en partido político. Sin embargo, varias facciones disidentes rechazaron el proceso de paz y siguen activas, frecuentemente vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
24. Corte Suprema de Justicia de Colombia (2018). [Lineamientos para la actualización de las determinantes ambientales: Tercera orden de la Sentencia STC 4360 de 2018 – Amazonía sujeto de derechos](#)
25. La cooptación de las instituciones regulatorias por parte de élites locales en la Amazonía, especialmente dentro de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), debilita la gobernanza ambiental al priorizar intereses particulares vinculados a la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías ilegales. Esta dinámica fomenta la corrupción y la impunidad, mientras que proyectos como los de créditos de carbono han generado conflictos intra-comunitarios relacionados con la gestión de fondos y el liderazgo, muchas veces agravados por la falta de transparencia. Aunque en

algunos casos los fondos fiduciarios han contribuido a reducir las tensiones, muchas comunidades siguen enfrentando problemas de gobernanza y cohesión interna. Paralelamente, la extorsión ejercida por grupos criminales sigue siendo generalizada, afectando tanto a territorios indígenas como a iniciativas privadas, al punto de que algunas empresas ya incluyen la extorsión como parte de sus costos operativos.

26. La deforestación ilegal y la degradación ambiental en la Amazonía, impulsadas por redes criminales organizadas, el acaparamiento de tierras y actividades extractivas como la minería ilegal y la ganadería extensiva, ejercen una enorme presión tanto sobre las comunidades como sobre los ecosistemas. Las respuestas gubernamentales débiles y la expansión de asentamientos refuerzan la deforestación en detrimento de la conservación, mientras que la región funciona como un “territorio de lavado” para los ingresos del narcotráfico. La alta demanda global de oro alimenta la minería ilegal, que acelera la deforestación, interrumpe la conectividad ecológica y desplaza a las economías legales, perpetuando un ciclo de destrucción forestal.
27. Las amenazas sistémicas en la Amazonía colombiana representan riesgos significativos para los inversionistas, debido a la compleja interacción entre la demanda global de materias primas, el crimen transnacional y la débil gobernanza. El apetito internacional — tanto por bienes legales como ilegales — impulsa la deforestación y el cambio en el uso del suelo. Al mismo tiempo, la región se ha convertido en un centro del crimen ambiental organizado transnacional, donde la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos alimentan la inestabilidad. Las redes criminales han establecido formas de “gobernanza criminal”, desplazando la presencia del Estado en vastas áreas y generando dependencia económica entre las poblaciones locales, lo que debilita aún más las perspectivas de inversión sostenible.
28. La Reforma Rural Integral fue establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 como un pilar fundamental para abordar la desigualdad en el acceso a la tierra. Aunque se han logrado avances, particularmente bajo la administración de Petro, con más de un millón de hectáreas compradas y más de tres millones formalizadas, la implementación se ha visto frenada por cuellos de botella burocráticos, limitada capacidad local y conflictos persistentes en las áreas rurales. *Reuters* (2024). [Colombia makes slow progress on land rights since Farc peace deal](#)
29. El Catastro Multipropósito, también producto del Acuerdo de Paz, es una herramienta clave para clarificar la tenencia de la tierra y mejorar la gobernanza rural. Hasta 2025, alrededor del 26,8% del territorio nacional ha sido actualizado. Sin embargo, las brechas de cobertura y la limitada coordinación con los territorios indígenas y colectivos implican que su completo potencial aún no se ha materializado. Gobierno de Colombia (2025). Colombia avanza en la implementación del Catastro Multipropósito, 26,8% del territorio nacional actualizado es la cifra que reporta el IGAC para 2025
30. Consulte la encuesta de la Amazon Investor Coalition y el Instituto Igarapé sobre riesgos de seguridad territoriales y regulatorios en la Amazonía, con introducciones disponibles en [portugués](#), [español](#). La versión en inglés está incluida en el mismo documento: simplemente desplácese hacia abajo en la página para verla. La encuesta ya está cerrada, pero las introducciones siguen siendo de acceso público.
31. De los 57 encuestados en Brasil, 38 estaban vinculados a instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil, mientras que 19 eran emprendedores del sector privado. En Colombia, 19 respuestas provinieron de profesionales de centros de investigación y ONG, y 12 estuvieron representando al sector privado.
32. Se recibieron mínimo 20 respuestas de Amazonas, 18 de Pará, 5 de Acre, 7 de Amapá, 4 de Rondônia, y 1 respectivamente de Roraima, Maranhão, Mato Grosso y Tocantins.
33. Otras áreas incluyeron São Gabriel da Cachoeira, Careiro Castanho, Manicoré, Alto Solimões, Médio Juruá, Amaturá y Santo Antônio do Içá.
34. Se invitó a las personas encuestadas a formular recomendaciones abiertas a las autoridades federales, estatales o locales para abordar los factores que generan inseguridad en los territorios donde operan. Las respuestas fueron revisadas y sintetizadas en áreas temáticas clave.

35. Por ejemplo, el Código Forestal de Brasil (Ley 12.651/2012) regula el uso del suelo, incluyendo el mantenimiento de reservas legales y áreas de preservación permanente. El Sistema Nacional de Medio Ambiente (Sisnama) coordina los esfuerzos de protección ambiental a nivel federal, estatal y municipal. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), una agencia dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, también es responsable de hacer cumplir la política de “deforestación cero”.
36. En Brasil, la Ley de Regularización de Tierras (13.465/2017) aborda cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, incluida la regularización de la propiedad en áreas rurales. El Cadastro Ambiental Rural (CAR) funciona como registro de predios rurales, mientras que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) es responsable de recolectar y organizar los registros de propiedades rurales, incluyendo su creación, subdivisión, unificación y compraventa. No obstante, la aplicación de esta ley es desigual, el Incra carece a menudo de capacidad operativa, y el CAR aún no ha sido digitalizado, lo cual favorece la impunidad y facilita prácticas corruptas e ilícitas en múltiples niveles.
37. El Estatuto del Indio de Brasil (1973, actualizado en 2006) establece los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas. En Colombia, el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas mediante la creación de resguardos indígenas ha sido un paso crucial para proteger los territorios frente a actividades ilegales como la deforestación, la minería y el acaparamiento de tierras. Iniciativas como los Planes de Gestión Ambiental Territorial (PGAT) brindan a las comunidades indígenas marcos jurídicos para gestionar de forma sostenible sus tierras ancestrales, fortaleciendo los derechos territoriales y reduciendo los conflictos sobre la tenencia de la tierra. Entidades nacionales como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) desempeñan un papel clave en la defensa de los derechos indígenas, la incidencia en las políticas públicas nacionales y la coordinación de esfuerzos para proteger los territorios indígenas frente a amenazas externas. Organizaciones de la sociedad civil como Amazon Conservation Team (ACT) y la Fundación Gaia Amazonas colaboran estrechamente con los pueblos indígenas en el mapeo territorial, la preservación cultural y el desarrollo de estructuras sólidas de gobernanza. Tropenbos Colombia promueve prácticas sostenibles de uso del suelo y facilita el diálogo entre las comunidades locales, los gobiernos y otros actores clave.
38. En Brasil, el Plan Amazonía para la Seguridad y la Soberanía (AMAS), liderado por el Ministerio de Justicia y financiado en parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ofrece un marco en esta dirección. Del mismo modo, programas como [PAMGIA](#) y el [Proyecto Sirenjud](#) pueden movilizar datos estandarizados para respaldar informes en tiempo real y la emisión de sanciones. Las medidas contra la corrupción y en favor de la transparencia, incluyendo la Ley Anticorrupción de Brasil (2013), la [Ley de Minería de Oro \(3025/23\)](#) y los programas de formación para fiscales sobre lavado de dinero vinculado a delitos ambientales, refuerzan este enfoque. Véase: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2023). [Plano Amas fortalece presença do Estado na Região Amazônica](#), y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2024) [Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro em crimes ambientais é tema de qualificação na Região Norte](#)
39. Este plan incluye apoyo financiero internacional, en particular de Noruega, Alemania y el Reino Unido, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) sobre los bosques, que vincula el financiamiento a reducciones medibles en la deforestación.
40. El Estado Mayor Central (EMC) es la facción disidente más grande y organizada del antiguo grupo guerrillero Farc-EP. Rechazó el acuerdo de paz de 2016 y mantiene presencia en varias regiones de Colombia, especialmente en la Amazonía y otras áreas rurales. Véase Reuters (2024). [Colombia calls off ceasefire with some units of EMC armed group](#)
41. Páramos son ecosistemas únicos de alta montaña que se encuentran principalmente en la región andina, a altitudes que van aproximadamente de los 3.000 a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Son comunes en países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

## Información Institucional

### Instituto Igarapé

**Ilona Szabó de Carvalho**  
*Cofundadora y Presidente*

**Robert Muggah**  
*Cofundador y Jefe de Innovación*

**Melina Risso**  
*Directora de Investigación*

**Leriana Figueiredo**  
*Directora de Programas*

**Maria Amélia L. Teixeira**  
*Directora de Operaciones*

**Laura Trajber Waisbich**  
*Subdirectora de Programa*

**Carolina Torres Graça**  
*Directora del Programa Green Bridge Facility*

## Ficha Técnica

### Coordinación general

**Robert Muggah**

### Investigación

**Katherine Aguirre, Terine Husek Coelho,  
Juan C. Garzón, Yanê Amoras Lima y  
Robert Muggah**

**Yanê Amoras Lima**  
*Directora de Investigación Jurídica en AIC*

**Cristian Méndez**  
*Asesor de Sistemas y Tecnología de la AIC*

Este trabajo se benefició de los aportes y recomendaciones fundamentales de los equipos de la AIC y del Instituto Igarapé.

### Edición

**Débora Chaves**

### Proyecto Gráfico

**Raphael Durão y André Guttierrez**

### Cómo citar:

INSTITUTO IGARAPÉ. Bajo el radar: riesgos de seguridad territoriales y regulatorios en Brasil y Colombia. Rio de Janeiro. Instituto Igarapé, 2025. Disponible en: <https://igarape.org.br/publicacoes/>

### Número DOI:

10.5281/zenodo.17127114



# INSTITUTO IGARAPÉ

a think and do tank

El Instituto Igarapé es un *think and do tank* independiente que realiza investigaciones, desarrolla soluciones y establece alianzas con el objetivo de impactar en las políticas y prácticas públicas y corporativas para abordar los principales desafíos en las áreas de naturaleza, clima y seguridad en Brasil y en el mundo. Igarapé es una institución sin fines de lucro y apartidista, con sede en Río de Janeiro y actuación a nivel local y global.



## AMAZON INVESTOR COALITION

Amazon Investor Coalition es una plataforma global de aprendizaje y colaboración que une a filántropos, inversionistas privados y corporativos con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y aliados para reducir la deforestación, promover economías positivas para el bosque y fortalecer el Estado de Derecho en toda la región amazónica.

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel.: +55 (21) 3496-2114

[contato@igarape.org.br](mailto:contato@igarape.org.br)

[igarape.org.br](http://igarape.org.br)

Asesoría de Prensa

[press@igarape.org.br](mailto:press@igarape.org.br)

Redes Sociales

 [facebook.com/institutoigarape](https://facebook.com/institutoigarape)

 [x.com/igarape\\_org](https://x.com/igarape_org)

 [linkedin.com/company/igarapeorg](https://linkedin.com/company/igarapeorg)

 [youtube.com/user/InstitutoIgarape](https://youtube.com/user/InstitutoIgarape)

 [instagram.com/igarape\\_org](https://instagram.com/igarape_org)



**INSTITUTO IGARAPÉ**  
a think and do tank